

**Universidad Andina Simón Bolívar**

**Sede Ecuador**

**Área de Derecho**

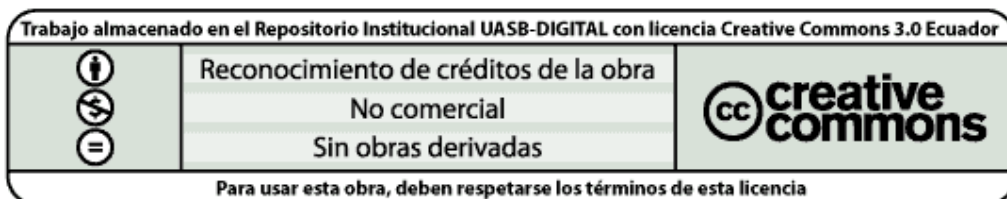
**Programa de Maestría en Derecho Penal**

**El valor del parte policial, en los juicios de tenencia de drogas**

Autora: Edith Elena Arévalo Carlosama

Tutor: Christian Masapanta Gallegos

**Quito, 2016**



## **CLAUSULA DE CESION DE DERECHO DE PUBLICACION DE TESIS**

Yo, Edith Elena Arévalo Carlosama, autora de la tesis intitulada “El Valor del Parte Policial, en los Juicios de Tenencia de Drogas” mediante el presente documento dejo constancia de que la obra es de mi exclusiva autoría y producción, que la he elaborado para cumplir con uno de los requisitos previos para la obtención del título de magister en la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.

1. Cedo a la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, los derechos exclusivos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, durante 36 meses a partir de mi graduación, pudiendo por lo tanto la Universidad, utilizar y usar esta obra por cualquier medio conocido o por conocer, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio económico. Esta autorización incluye la reproducción total o parcial en los formatos virtual, electrónico, digital, óptico, como usos en red local y en internet.

2. Declaro que en caso de presentarse cualquier reclamación de parte de terceros respecto de los derechos de autor/a de la obra antes referida, yo asumiré toda responsabilidad frente a terceros y a la Universidad.

3. En esta fecha entrego a la Secretaría General, el ejemplar respectivo y sus anexos en formato impreso y digital o electrónico.

Fecha. 27 de julio de 2016.

Firma: .....

### **Abstract**

El análisis realizado al valor probatorio que se le da de manera errónea al Parte Policial emitido por la Unidad Antinarcóticos dentro de los juicios de tenencia ilegal de sustancias sujetas a fiscalización, cuando su esencia jurídica radica en constituir un documento público que informa la noticia críminis a la autoridad competente esto a la Fiscalía General del Estado, al punto de encontrarse sujeto a la verificación fiscal durante la indagación criminal, es más, se pretende clarificar que el verdadero rol procesal de la Policía Nacional es la de dar a conocer técnicamente a través de un documento público -Parte Policial- el cometimiento de un crimen, para lo cual se llevó a cabo la correspondiente investigación bibliográfica y de campo, además de hacer uso de las técnicas de la investigación científica, todo con la finalidad de emitir posibles reformas al Código Orgánico Integral Penal.

## **Dedicatoria**

A mis padres Vicente y Piedad,  
por su amor y dedicación.

## **Agradecimiento**

A mi familia y Lenin,  
que siempre me han apoyado ;  
mi gratitud a los doctores Christian Masapanta Gallegos,  
Jorge Vicente Paladines y Juan Pablo Morales,  
por su tiempo y aporte en la realización del presente trabajo.

## **TABLA DE CONTENIDOS**

<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>8</b>
<b>CAPÍTULO I. Valor probatorio del parte policial en los delitos de tenencia de drogas.....</b>	<b>12</b>
<b>1.1</b> El parte policial y su naturaleza jurídica.....	12
<b>1.2</b> El parte policial y su incidencia en el inicio de la acción penal pública.....	18
<b>1.3</b> Relevancia probatoria del parte policial .....	20
<b>1.4</b> La criminalización secundaria que ejercen las agencias ejecutivas en los delitos de tenencia de drogas .....	25
<b>CAPÍTULO II. El valor probatorio del parte policial ecuatoriano dentro de la criminalización secundaria y su aplicación en los juicios de tenencia de drogas.....</b>	<b>30</b>
<b>2.1.</b> El parte policial como simple noticia críminis en la realidad ecuatoriana .....	36
<b>2.2.</b> El ejercicio del poder punitivo y el rol de la policía antinarcóticos.....	40
<b>2.3.</b> El juicio penal en delitos de tenencia de drogas y los derechos constitucionales de los procesados .....	45
<b>2.4.</b> La tenencia de Drogas. El Marco Legal .....	57
<b>2.5.</b> La tenencia de Drogas. Criminalización del Consumo.....	62
<b>CAPÍTULO III. El valor del parte policial en la práctica de juicios de Tenencia de Drogas .....</b>	<b>68</b>
<b>3.1.</b> Resumen de casos relativos a la tenencia de Drogas .....	69
<b>3.2.</b> Análisis Crítico .....	78

<b>CONCLUSIONES .....</b>	<b>81</b>
<b>RECOMENDACIONES .....</b>	<b>84</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>85</b>

## INTRODUCCIÓN

Nuestra legislación no da valor de prueba al parte policial. Sin embargo, al no ser explícita dejar a discrecionalidad del juez la valoración de los recaudos procesales, permitiéndole que incurra en una sobrevaloración del referido documento dentro del proceso de juzgamiento.

En la práctica, y en gran parte de los juicios, las diligencias probatorias se limitan a la recepción de testimonios de los agentes del orden mencionados en el parte policial, donde además se da cuenta de la aprehensión de la droga, la captura de los sospechosos, el pesaje e identificación de la droga y otros detalles de la investigación que tuvieron por fin el descubrimiento de la infracción y de los presuntos responsables de la misma, que a través de un testimonio ingresa como prueba en un proceso judicial.

Cuando la prueba para condenar subyace exclusivamente a los testimonios de los agentes policiales, efecto que no viene a ser más que un desarrollo o ratificación del parte en relación, llegan a dictarse sentencias condenatorias que constituyen una negación de toda garantía procesal, y en particular de la presunción de inocencia.

El parte informativo es un elemento técnico, documento que puede orientar a las diligencias de recopilación de evidencias, y que ayudar a estructurar una investigación que puede o no terminar en un proceso judicial en donde prevalecerá el respeto y aplicación del *debido proceso*. Cada elemento aportado por la policía en la fase preprocesal o de investigación son meros indicios, que pueden ser considerados elementos de convicción si existe relación entre los hechos fácticos con la normativa jurídica estatal. En la esfera del tráfico de sustancias sujetas a fiscalización se establecerá en este análisis que se ha incurrido en el empleo del poder punitivo del Estado en contra de personas que podrían ser consumidores, a quienes se debe brindar un servicio de salud pública.



La situación reviste caracteres alarmantes y de gravedad, ya que en la mayor parte de los casos, los partes policiales no constituyen una descripción fiel de la verdad, sino que más bien trastocan los hechos como resultado de actos de corrupción amañados tanto por las agencias ejecutivas como judiciales, lo que deviene no sólo en impunidad de los efectivos responsables, sino -lo que es peor- en el indebido procesamiento y condena de inocentes, por la única culpa de pertenecer a los estratos más débiles o vulnerables de la población.

Así, vista la realidad en materia de juzgamiento de “*involucrados*” en ilícitos de tenencia de drogas, la verdad es que con el mecanismo del parte policial, con la trascendencia que a él asignan jueces y fiscales, y, sobre todo, con el poder punitivo que el Estado ejerce actualmente con el vigente Código Orgánico Integral Penal, *se continúa criminalizado la pobreza*.

Es este el sombrío panorama que impera en el juzgamiento de los involucrados en ilícitos de drogas, el móvil fundamental del presente trabajo. Si, con este aporte, se lograría, al menos, regular legal y reglamentariamente lo concerniente al parte policial, sus pormenores y requisitos, su debido valor dentro del proceso, algo se habría adelantado en campo tan delicado del Derecho Penal.

Se debe realizar cambios al proceso investigativo, e introducir condiciones claras en orden a que, entre otros aspectos las agencias policial y judicial cumplan sus roles eminentemente técnicos y jurídicos, en pro de los derechos humanos y los respectivos Convenios que versan sobre la materia.

Mientras tal remedio no se dé, el parte policial antidrogas, es susceptible de contradicciones y errores, la posibilidad de ser condenado por delitos de tenencia de drogas es alta, debido a que en los procesos judiciales el parte o atestado policial predetermina irremisiblemente a una sentencia judicial que condena en porcentaje

mayoritario a traficantes que dentro de la tabla valorativa se catalogan en escala baja, debido a que se constituye en el único elemento de prueba para el juicio, sin considerar la inexorable obligación de juzgarse en atención a evidencias fácticas constituidas como fruto de una investigación respetuosa del debido proceso.

En consecuencia, cualquier tribunal penal del Ecuador –llámese de Garantías Penales o Sala Penal– termina allanándose a los partes y dictando, sin mayores pruebas sentencias condenatorias; quedando evidenciado así graves violaciones a las garantías de los procesados y a la ética que debe imperar dentro de un estado de derecho, el cual *“exige y presupone que, al tiempo que se mantiene la legalidad formal, pueda, en la tutela de los derechos fundamentales, trascenderse a la legalidad material”*<sup>1</sup>.

En el desarrollo del trabajo utilizaré preferentemente los métodos deductivo y jurídico, fundado el primero en los principios admitidos generalmente como ciertos o establecidos previamente como verdaderos, y consistente el segundo, en la suma de procedimientos lógicos para averiguar la causa o problema principal que ha dado origen a la presente investigación, es decir, el valor de prueba que tanto fiscales y jueces atribuyen al parte policial en materia delitos de drogas.

Con el fin de volver claro y asequible el texto resultante de la tesis propuesta, he dividido al trabajo en tres capítulos: el **primero**, que explicará la incidencia del parte policial en el proceso penal y, la criminalización que ejercen las instituciones del Estado de ciertos comportamientos humanos como el de tenencia de sustancias sujetas a fiscalización; el **segundo** referente al parte policial frente al debido proceso; y, el **tercero**, que contendrá el análisis de estadística que justifican la tesis, al exponer la incidencia directa del parte policial en la emisión de sentencias condenatorias.

---

<sup>1</sup> Jacobo López de Quiroga, *Instituciones de Derecho Penal*, Cuyo, Ediciones Jurídicas, 2001, p. 32

Terminaré, en fin, con las conclusiones y recomendaciones tendientes a optimizar la práctica judicial en materia de juicios por tenencia de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

## **CAPÍTULO I. Valor probatorio del parte policial en los delitos de tenencia de drogas**

En el presente capítulo denotaremos la aplicación dada al parte policial en los enjuiciamientos criminales seguidos por tenencia ilegal de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Se empezará analizando el proceso de formulación del documento, para terminar objetando la importancia procesal asignada al mismo como parte de una sentencia condenatoria.

Detallaremos en un primer momento, el valor que para la policía antinarcóticos tiene el parte policial. A continuación, se desarrollará el verdadero valor del parte policial frente a los derechos de los procesados y la incidencia de tal documento en los delitos de acción pública. Y, en un tercer momento, se discutirá sobre la importancia asignada a tal documento por los jueces llamados a resolver sobre las infracciones por tenencia de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

Es decir, el último apartado del capítulo hará relación a la naturaleza jurídica del parte policial, para establecer si debe ser considerado como una simple noticia criminal o realmente puede constituir como un elemento de prueba para dictar la correspondiente resolución sancionatoria; efecto que explicaría un ejercicio punitivo del Estado, a través de la institución policial, sobre los temas de tenencia de drogas.

### **1.1 El parte policial y su naturaleza jurídica**

Con el nacimiento del constitucionalismo, la eclosión histórica de la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del hombre, surge a fines del siglo XVIII, un cambio en la vida política que afectará radicalmente la relación entre el Estado y los habitantes<sup>2</sup>. El rey o soberano ya no es el que gobierna a su antojadiza voluntad, sino más bien es el pueblo soberano, quien agrupado dentro de los límites determinados en

---

<sup>2</sup> Agustín Gordillo, *Tratado de Derecho Administrativo y Obras Selectas*, Buenos Aires, Fundación de derechos Administrativos, 2013, p. 41

un territorio, establece sus propias normas de convivencia social, estableciendo además el poder del Estado.

La Constitución distribuye el poder estatal, ordenando cada sociedad a su propio modo<sup>3</sup>. En nuestro país, según la carta magna vigente, son cinco funciones que ejerce el Estado Ecuatoriano: a) la función Legislativa (Asamblea Nacional), b) la Ejecutiva (Presidencia de la República), c) Judicial (Órgano Judicial), d) Transparencia y Control Social, y, e) Electoral. Cada función tiene su propio accionar la Función Legislativa, que tiene como atribuciones crear leyes y fiscalizar, la Función Ejecutiva, dedicada a administrar el Estado; la Función Judicial, encargada de administrar la justicia; la Función de Transparencia y Control Social, creada para promover e impulsar el control de las entidades y organismos del sector público y privado que desarrollen actividades de interés público; y, la Función Electoral, que garantiza el ejercicio de los derechos políticos.

El hombre renuncia a ciertos derechos, que se encarnan en las instituciones antes descritas, con el fin de que toda persona que habita dentro de un territorio establecido goza de ciertas libertades así como de obligaciones definidas por un orden jurídico, a fin de que la convivencia entre ciudadanos sea tolerable. De esta manera se busca mitigar deseos individuales de venganza, en pro de una paz social, enmarcada en el respeto a los derechos de cada persona.

Dentro del orden jurídico se definen dos instancias claras y diferentes que son el delito y la pena. De aquí que toda persona es castigada por un hecho cometido y previsto en la ley como delito. En donde cabe tomar en cuenta, que el daño provocado por un crimen al cuerpo social es el desorden que se introduce en él: *“el escándalo que*

---

<sup>3</sup> Agustín Gordillo, *Tratado de Derecho Administrativo y Obras Selectas*, ... p. 41

suscita, el ejemplo que da, la incitación a repetirlo si no ha sido castigado, la posibilidad de generalización que lleva en sí”<sup>4</sup>. Por su parte, la pena ha sido definida como toda medida dispuesta por la autoridad judicial que, amparada por la ley, limita o restringe el ejercicio de los derechos de las personas responsables por la comisión del delito.

Sin embargo, “*Toda pena que no derive de la necesidad es tiránica*”, escribe Montesquieu, pues, según el pensamiento de Beccaria, *la necesidad es la que obligó a los hombres a ceder su libertad. “Todo lo demás es abuso y no justicia, es hecho, pero no derecho. La relación entre la calidad de las penas y la calidad del delito corresponde a una ilusión regresiva”*<sup>5</sup>.

En todo caso, sea cual fuere la filosofía de la pena, los criterios de necesidad y dignidad de la persona fundamentan la minimización de las penas, permitiendo vincular la calidad de la pena a los conceptos modernos de igualdad, legalidad, proporcionalidad, equidad, certeza y carácter privativo de la pena. Como indica Luigi Ferrajoli: la pena “*debe ser necesaria y la mínima de las posibles respecto al fin de la prevención de nuevos delitos (...) “La ley no debe establecer más que penas estricta y evidentemente necesarias”*<sup>6</sup>; y “*excluida cualquier finalidad de enmienda o disciplinaria, lo único que se puede y se debe pretender de la pena es que, como escribiera Francesco Carrara, “no pervierta al reo”, es decir que no reeduke, pero tampoco deseduke; que no tenga una función correctiva, pero tampoco una función corruptora; que no pretenda hacer al reo mejor, pero que tampoco lo haga peor”*<sup>7</sup>

Para administrar el poder punitivo el Estado recurre a la policía. La misión institucional de la Policía se basa en un objetivo primordial: “*Atender la seguridad*

---

<sup>4</sup> Michael Foucault, *Vigilar y Castigar*, Madrid, Siglo XXI Editores S.A., 1976, p. 97

<sup>5</sup> Luigi Ferrajoli, *Derecho y Razón*, Madrid, Editorial Trotta, 1995, p. 262

<sup>6</sup> Luigi Ferrajoli, *Derecho y Razón*, ... p. 394

<sup>7</sup> Luigi Ferrajoli, *Derecho y Razón*, ... p. 397

*ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional*”. (Constitución de la República, Art. 163)<sup>8</sup>. Para cumplir con esta tarea la policía sale a recorrer las calles y de esta manera previene la posible comisión de un acto delictivo, o, bien, procede a la detención del individuo que violó el orden jurídico protegido, provocando con ello una alerta y un temor social. En todos los casos la policía está obligada a emitir un informe escrito que se conoce como parte policial.

Por lo tanto, la función policial debería quedar limitada únicamente a tres actividades bajo la dirección de un órgano especializado: la investigación, prevención, y ejecución de lo resuelto por la función jurisdiccional, en donde ninguna de estas tareas pueda comportar el ejercicio de poderes omnímodos sobre la libertad y más derechos fundamentales de la persona<sup>9</sup>.

Sin embargo, al ser los agentes del orden los que toman el primer contacto con las personas que tienen participación de un posible delito, son quienes ejecutan el poder punitivo de un Estado, configurando un conjunto de medidas que operan contra un grupo mayoritario de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, cuando el grupo en cuestión ejerce violencia, se lo demoniza y se exige una sanción (a través de: torturar, prisión, muerte, etc.). En cambio, si alguien inflige daño a un demonizado, queda legitimado e inmune<sup>10</sup>. Este comportamiento lo expresa el profesor Ramiro Ávila Santamaría relacionándolo con la policía de la siguiente manera:

---

<sup>8</sup> *Doctrina Policial de la República del Ecuador, orden seguridad y protección de los derechos*, Ministerio del Interior, Quito, 2012, p. 13 disponible a 19 de junio de 2014 en: <http://www.ministeriointerior.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2012/10/Doctrina-Policial-de-la-Rep%C3%BAblica-del-Ecuador.pdf>

<sup>9</sup> Luigi Ferrajoli, *Derecho y Razón*, ... p. 768

<sup>10</sup> Oscar Vilhena Viera, *Desigualdad y Estado de Derecho*, en Sur. Revista Internacional de derechos humanos, año 4, No. 6, Sao Paulo, Red Universitaria de Derechos Humanos (RUDH), 2007, p. 44, citado por Ramiro Ávila Santamaría, *“La (in) justicia penal en la democracia constitucional de derechos”*, Quito, Ediciones Legales EDLE S.A., 2013, p. 16

*“la perspectiva es perversa: por un lado se demanda la intervención policial y penal para proteger a las personas que se consideran honradas y que se benefician del estatus quo; por otro lado, se perdona a quien viola derechos humanos de los clasificados como delincuentes por el sentido común: La primera es la víctima de la violencia social y la segunda no es víctima de la violencia estatal”.*<sup>11</sup>

De lo anterior podemos ver que es de suma importancia que el poder punitivo de un estado sea administrado adecuadamente. Nuestra historia humana muestra a menudo, como indica Luigi Ferrajoli, que *“la fantasía humana no ha reparado en límite alguno para inventar las formas más feroces de punición. En muchos casos, los mecanismos punitivos han sido más graves e infames que los propios delitos. Pues, mientras el delito constituye una violencia ocasional y a veces impulsiva, la violencia originada por la pena es consiente y programada”*<sup>12</sup>.

Como consecuencia de la práctica antes referida, existe una intolerable discrecionalidad que ha conducido a una arbitrariedad en el uso del sistema penal,<sup>13</sup> manifestado por las torturas empleadas en la etapa investigativa, y el juzgamiento no garantista de los presuntos sospechosos.

En cambio, la función preventiva de la Policía se dirige hacia conductas que no se han realizado todavía y que se encuentran únicamente en el mundo de lo posible. Para lo cual, se emplean una cantidad medios como: la vigilancia, la persuasión, la instrucción pública. Dichos medios están estrictamente limitados por la ley. Ésta por regla general no autoriza la utilización de ninguna acción coactiva al llamado poder policial. Por esta razón, la tarea de prevención requiere una planificación inteligente de

---

<sup>11</sup> Ramiro Ávila Santamaría, *La (In) Justicia Penal en la Democracia Constitucional de Derechos*, Quito, Ediciones Legales EDLE S.A., 2013, p. 16

<sup>12</sup> Luigi Ferrajoli, *Derecho y Razón*, ... p. 395

<sup>13</sup> Ramiro Ávila Santamaría, *La Penalización de lo irrazonable*, texto que figura como prólogo de la obra *“Entre el control social y los derechos humanos, Los retos de la política y la legislación de drogas”*, Quito, imprenta V&M Gráficas, 2009, p. XIII, XIV



actividades dirigidas a grupos genéricos de potenciales delincuentes o posibles víctimas, y una organización eficiente para el efecto<sup>14</sup>.

En cambio, la función represiva o de investigación criminal, ejercida por la Policía, consiste en la investigación de la verdad respecto a los hechos ilícitos ya sucedidos. Generalmente esta función se confunde con la función de prevención, o como expresa Young: *“la realidad del delito en las calles puede ser la realidad del sufrimiento humano y el desastre personal”*<sup>15</sup>.

Así pues, la sociedad requiere de una policía eficiente, técnica y no represora. Lastimosamente, es frecuente, cuando se concurre a una dependencia de investigación policial, encontrarse con escenas donde los investigados presentan horrorosas huellas de tortura o suplicando a los torturadores ya no les sigan maltratando. No obstante, en los informes se hace constar que la investigación se ha llevado a cabo con todas las garantías y con la presencia del Fiscal, cuando en gran parte de casos éste no ha tenido presencia alguna.

Con respecto a la investigación en los ilícitos de drogas en nuestro país, Eugenio Zaffaroni indica: *“Resulta especialmente relevante el caso de la República del Ecuador, donde los fiscales no sólo toman declaraciones al imputado en sede policial, sino que los fiscales antinarcóticos tienen sus despachos en dependencias de la Policía Antinarcóticos y es esa misma dependencia policial quien elabora los informes”*<sup>16</sup>. Sin embargo, la experiencia nos indica que en la actualidad los fiscales cuentan con sus propias oficinas y no, como afirma el tratadista, en las dependencias policiales, el parte

---

<sup>14</sup> Julio B.J. Maier, *Derecho Procesal Penal, Tomo II Parte general, Sujetos procesales*, Buenos Aires, Editores del Puerto s.r.l., 2004, p. 408

<sup>15</sup> Jock Young, et al. (o y otros), *El Fracaso de la Criminología*, obra que consta en Criminología Crítica y Control Social, “El Poder Punitivo del Estado”, Rosario (Argentina), Editorial Juris, 1993, p. 30

<sup>16</sup> Jorge Vicente Paladines, *La (des)proporcionalidad de la ley y la justicia antidrogas en Ecuador*, Cuadernos Defensoriales 1, Colectivo de Estudios Drogas y Derecho, Defensoría Pública del Ecuador, Quito, 2012, p. 32

policial es la simple noticia criminis. Es decir, la noticia del delito, y que por tanto este documento debe limitarse a expresar nada más que las circunstancias en las cuales se procedió a la aprehensión de la droga y de los presuntos responsables del delito.

## **1.2. El parte policial y su incidencia en el inicio de la acción penal pública**

Debemos empezar por establecer qué es la acción penal, “*la palabra "acción", según recuerda Couture, se ha considerado sinónima de derecho (de ahí la excepción de falta de acción), de demanda y de facultad de promover la actividad judicial, es decir, de un poder jurídico diferente del derecho y de la demanda, que instiga la actividad del Estado, a fin de que se declare la existencia de un derecho*”<sup>17</sup>.

Desde otro punto de vista, la acción es el derecho público, cívico, subjetivo, abstracto y autónomo, que tiene toda persona natural o jurídica, para obtener la aplicación de la jurisdicción del Estado a un caso concreto mediante una sentencia, a través de un proceso, o para pedir se inicie la investigación penal previa al proceso<sup>18</sup>.

Para que pueda instaurarse la pretensión punitiva y para llegar a una sentencia es necesario que previamente se lleve a cabo una serie de actos formalmente previstos por la ley procesal y que constituyen lo que entendemos por proceso penal. Ahora bien, para que éste se inicie y se desarrolle de forma válida, es preciso el acto de instancia que se denomina acción procesal<sup>19</sup>.

Este mecanismo legal de la acción procesal presenta dos modalidades: a) Puede iniciarse directamente por la persona particular cuando se trata de delitos que solo afectan a una persona en particular, y cuya comisión no perturba tan gravemente a la

---

<sup>17</sup> Ricardo Levene (h), *Manual de Derecho Procesal*, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1993, p. 151

<sup>18</sup> Hernando Devís Echandía, *Teoría General del Proceso*, Bogotá, Editorial Universitaria, 1997, p. 189

<sup>19</sup> Jorge E. Vázquez Rossi, *Derecho Procesal Penal, Tomo I, Conceptos Generales*, Buenos Aires, Editores Rubinzal – Culzoni, 2008, p.311

sociedad en general. En este caso, el ofendido hace el reclamo a través de una querrela, en la que expone ante la autoridad competente el hecho suscitado e identifica a los autores de tal infracción. b) En cambio, cuando se ha vulnerado bienes jurídicos tutelados por el Estado, nos encontramos en la esfera de la acción pública, donde se pone en marcha aparataje estatal, cuya acción penal pública es ejercitada a través de Fiscalía, en donde los particulares solo tienen la facultad de instar la promoción de la acción<sup>20</sup>.

A través del parte policial, el personal de la fiscalía toma contacto con los involucrados, y explora la escena donde se perpetró los acontecimientos. Realizada dicha revisión, se elabora un informe muy general en el que se menciona los motivos por los que asistió a determinado sitio. Sin embargo, y como dice Ricardo Vaca Andrade, la denuncia presentada ante el Fiscal siempre debe ser sometida a un detenido análisis jurídico y a la correspondiente calificación por parte del agente fiscal, para luego ordenar una investigación y/o el cumplimiento de alguna diligencia previa a la iniciación de la misma<sup>21</sup>.

Al final, como resultado de la discrecionalidad, viene el de que atrás de cada situación de una mala entendida flagrancia, una persona es condenada al encierro, exponiéndose a la batalla desigual de enfrentar una investigación brutal, un procesamiento sin garantías y una condena en la mayor parte de veces injusta. En los casos por tráfico de estupefacientes o sustancias sujetas a fiscalización enmarcados en escala mínima y que se pone en conocimiento del Juez de flagrancia, concluye con un procedimiento que determina un tiempo tan reducido, limitando derechos y garantías de los procesados.

---

<sup>20</sup> Hernando Devís Echandia, *Teoría General del Proceso*, ... p. 191

<sup>21</sup> Ricardo Vaca Andrade, *Manual de Derecho Procesal Penal*, Quito, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2009, p. 469

La Policía antinarcóicos realiza operativos contra traficantes que se los enmarca en mediana o baja escala, lo que comúnmente se ha denominado delincuencia de bagatela, y que terminan siendo sancionados. Pero es muy raro que se procese a integrantes de delincuencia organizada, verdaderos traficantes, cuyo poder de corrupción abarcan a todas las instancias estatales.<sup>22</sup>

### **1.3. Relevancia probatoria del parte policial**

Tal como se expresó en la introducción al presente trabajo, la legislación penal ecuatoriana ha dejado a la discrecionalidad del juez la valoración de los recaudos procesales, abriendo con ello el camino para que en la práctica, el parte policial revista sobrada trascendencia. Esta situación sobresale particularmente en el juzgamiento de los involucrados en los ilícitos relacionados con sustancias estupefacientes y sicotrópicas, en donde, las diligencias probatorias se contraen solamente a receptar los testimonios de los agentes mencionados en dicho documento.

Así, vista la realidad en materia de juzgamiento de involucrados en ilícitos de tenencia de drogas, sólo con el mecanismo del parte policial se llega a sancionar a un gran número de personas que presentan adicciones, ya sea por una falta de claridad normativa o por confusión en la naturaleza jurídica del documento policial, esta situación evidencia una grave violación de las garantías de los procesados y de la ética propia de un Estado de Derecho y Justicia Social. Lo mismo ocurre con la prisión preventiva, pues si ella antecede a la sustanciación del proceso penal, ya no se puede hablar de “*debido proceso*”, puesto que la prisión solo se puede aplicar luego de la finalización del proceso.

En tal forma, el proceso es únicamente aparente: “*El Estado debe encontrar los medios y las herramientas tecnológicas sustitutivos de la medida de coerción personal*

---

<sup>22</sup> Michael Foucault, *Vigilar y Castigar*, ... p. 288, 289

*a fin de evitar la transgresión del principio de judicialidad. De aplicarse la privación cautelar de la libertad, ha de ser por escaso tiempo y, en todo caso, sin excepción (sea la sentencia condenatoria, absolutoria o de sobreseimiento), indemnizable.*”<sup>23</sup>.

A decir de Eduardo M. Jauchen, el acaecimiento de un ilícito penal importa una discordia en el seno del grupo social. La comunidad así resquebrajada necesita un restablecimiento y ha convenido para ello que frente al delito sobrevenga la imposición de una pena<sup>24</sup>, por ende, se convino en el establecimiento de un órgano que juzga al ilícito, pero que debe hacerlo con claridad, determinando cuál es el delito y qué persona es responsable de su perpetración.

Desde esta perspectiva, resulta pertinente cuestionarse el valor de un informe que a fin de cuentas es la base de una sentencia, si el parte antinarcóticos es suficiente para la condena, entonces, ¿Para qué poner en movimiento todo el aparato jurisdiccional del Estado? ¿Qué sentido tiene realizar todo un proceso para sancionar a un individuo que a razón de un documento administrativo es encontrado culpable previo al juzgamiento?

A efectos de comprender las objeciones formuladas, es necesario repasar los límites formales y materiales que pone al poder punitivo del Estado, mediante principios y garantías que precautelan la correcta aplicación de la ley penal. Con esto se evita que se violenten tanto los derechos humanos del individuo que está siendo sujeto de un proceso penal como las garantías establecidas en la Constitución.

Cabe recordar que uno de los principios en los cuales se asienta la ley sustantiva penal es la presunción de inocencia, que es asumido, tanto constitucional como legalmente, como uno de los fundamentos del debido proceso en general y del debido

---

<sup>23</sup> Fabián Ignacio Balcarce, *Dogmática Penal y Principios Constitucionales*, Buenos Aires, Editorial Montevideo de Buenos Aires, 2014, p. 324, 325

<sup>24</sup> Eduardo M. Jauchen, *Tratado de la Prueba en Materia Penal*, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, 2009, p. 13

proceso penal, en particular<sup>25</sup>. El juzgador debe administrar justicia sin ninguna clase de prejuicio. No debe pensar de antemano que quien está siendo juzgado es culpable, pues contravendría garantías y principios fundamentales inherentes a cada ser humano.

Así mismo, no es posible la imposición de la sanción sin previo juicio. Entre la hipótesis de un suceso delictivo y su eventual penalización, se interpone el insoslayable proceso<sup>26</sup> y dentro de él, las partes deben demostrar que lo que afirman unas y otras es cierto. A través de este mecanismo, se logra llevar al órgano juzgador a la verdad de los hechos suscitados ocurridos antes, durante y después de la comisión del acto delictivo y lo demuestran a través de la actividad probatoria.

Dentro del proceso, y específicamente en el momento del juicio, es donde el órgano de justicia va a juzgar una determinada conducta que se presume como delito. Así como también a su respectivo ejecutor. Sin embargo, se hace necesario probar y demostrar cómo fueron las circunstancias del hecho que merece una pena. La prueba no consiste en averiguar sino en verificar<sup>27</sup> hechos pasados que en un momento dado dentro del proceso se trae a la mente del juez para que este pueda sancionar al responsable del delito.

En la práctica, se demuestra la ficción del debido proceso, por cuanto, en el ilícito de la tenencia de drogas nos encontramos ante el problema de que el portador ha de ser revisado lo cual ya implica una vulneración al ciudadano (derechos y garantías). No obstante, resulta necesaria para disponer de evidencia, en la existencia de la sustancia ilícita incautada.

---

<sup>25</sup> Jorge Zabala Baquerizo, *Tratado de derecho Procesal Penal*, Guayaquil, Edino, 2004, p. 196

<sup>26</sup> Eduardo M. Jauchen, *Tratado de la Prueba en Materia Penal*, ... p. 14

<sup>27</sup> Christian Salas, *La Prueba en el Nuevo Código Procesal Penal*, a 10 de julio del 2014. Disponible en

<http://www.amag.edu.pe/webestafeta2/index.asp?warproom=articles&action=read&idart=113>

.p. 03

La prueba es una garantía para todos porque interesa a la sociedad que se descubra la verdad. No obstante, respecto del inocente es mucho más importante el garantizar que el Juez Penal no lo condenará a menos que existan pruebas legalmente obtenidas, objetadas y suficientes que demuestren con evidencia su responsabilidad penal<sup>28</sup>. Quien administra justicia debe estar seguro de la culpabilidad del procesado, pues está en juego uno de los bienes más valiosos del ser humano como es la libertad. Siendo la prueba el instrumento más adecuado con el que cuentan las partes para llevar ante el juzgador la verdad real de los hechos que en ese momento se están juzgando. El Juez es el responsable de restituir el orden social establecido y que se ha visto violentado. Los elementos que se constituyen prueba son un aporte que hacen las partes para que el juzgador vaya caminando de manera objetiva a la verdad de lo ocurrido, para que se resuelva la situación jurídica de la o las personas involucradas en un posible hecho delictivo.

La prueba, como cualquier otra actividad que se desarrolla en el proceso, está limitada por normas de procedimiento, que indican cuándo y cómo deben proponerse las mismas<sup>29</sup>. Es por ello que las partes procesales están en la obligación de presentar las pruebas en su debido momento, debiendo reunir los requisitos generales de pertinencia, utilidad y licitud. Este último factor es el que plantea el mayor número de problemas prácticos<sup>30</sup>, haciéndose necesario refutar aquellas consideradas ilegales que han sido obtenidas o presentadas contraviniendo tanto principios como garantías constitucionales y procesales. En la mayoría de procesos penales (o en todos), en el momento probatorio, el Fiscal introduce como prueba, a través del testimonio, el parte policial que se elaboró al momento de conocer o encontrar a un individuo en la comisión de un delito.

---

<sup>28</sup> Ricardo Vaca Andrade, *Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo II*, Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2010, p.883

<sup>29</sup> Joan Picó I Junoy, *El Principio de la Buena Fe Procesal*, España, J.M. Bosch Editor, 2005, p. 202

<sup>30</sup> Joan Picó I Junoy, *El Principio de la Buena Fe Procesal*, ... p. 204

Por lo dicho, las partes necesitan buscar auxilio con los expertos en determinada ciencia para que sean ellos quienes ilustren al juez sobre lo que desconoce. A su vez, para que el perito realice su trabajo, debe estar provisto de todo el equipo necesario para efectuarlo: sea que lo haga en un laboratorio o en el lugar donde se registró el ilícito. Pues, por más experto que el Perito sea en su materia necesita del instrumental necesario para realizar el trabajo a él encomendado. Caso contrario, su informe puede carecer de valor científico y corre el riesgo de ser desvirtuado fácilmente.

De lo anotado se colige que el agente de policía que realiza el parte policial informando de un hecho delictivo no puede ser considerado como perito. Pues no es un experto o especialista en una materia o especialidad determinada. Por tanto, el parte policial no es un informe pericial en el que el juzgador pueda fundar su sustento legal para emitir sentencia condenatoria o absolutoria en un caso concreto.

Otro de los medios probatorios establecidos por la ley es el testimonio, siendo este el medio más adecuado para reconstruir los acontecimientos humanos sobre la base de una recordación más o menos fidedigna de lo acontecido. Por esta característica, es la prueba que se desenvuelve con mayor agilidad, con relativa facilidad y hasta con excesiva frecuencia, de tal manera que en la actualidad resulta difícil encontrar un proceso penal en el que no exista testimonio<sup>31</sup>.

El testigo está llamado a deponer sobre hechos que han caído bajo el dominio de sus sentidos<sup>32</sup>. Aquel que da su testimonio dentro de la etapa de juicio, presencié de manera directa lo ocurrido en el momento en que se perpetró el delito. Por ello, el testigo transmite al juez el “conocimiento” que tenga sobre una determinada circunstancia<sup>33</sup>.

---

<sup>31</sup>Ricardo Vaca Andrade, *Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo II*,... p. 1023.

<sup>32</sup>Eduardo M. Jauchen, *Tratado de la Prueba en Materia Penal*... p. 285

<sup>33</sup>Eduardo M. Jauchen, *Tratado de la Prueba en Materia Penal*... p. 285



Nuestra legislación procesal penal establece que el medio de prueba testimonial lo rinde la persona procesada, la víctima y otras personas que conocen las circunstancias de la infracción. En la indagación previa, el Fiscal recoge las versiones de quienes estuvieron al momento de suceder el hecho punible, para luego dentro del juicio presentarlos como testigos.

#### **1.4. La criminalización secundaria que ejercen las agencias ejecutivas en los delitos de tenencia de drogas**

La sociedad carece de igualdad entre pares. El contexto donde se desarrollan los individuos no es el mismo; y las condiciones económicas, sociales y culturales influyen sin duda alguna, en la percepción que construye los conceptos de lo bueno, lo malo y lo prohibido en sociedad.

Dichos conceptos, a su vez, se transforman en reglas sociales que permiten la discriminación de conductas, diferenciando las comunes de aquellas repudiables; efecto que, en una lógica democrática, deriva en construcción de normas que dan contenido aquello que conocemos como ilegal. Esto, a lo largo de la historia humana, provocó una disminución de valores como el respeto y la tolerancia, generando resentimientos que han desencadenado en conductas violentas.

En el contexto antes señalado, el Estado, para proteger la convivencia social entre los individuos, dicta normas de carácter represivo, en las cuales se establece que una determinada conducta es reprimida con una sanción: ahí el delito y la pena. Ésta última constituye, en principio, el medio coactivo más contundente con que cuenta el Estado. Mediante la pena se puede lícitamente privar de su vida a una persona o tenerla encerrada en la cárcel durante años<sup>34</sup>. Por otra parte, y para garantizar el cumplimiento

---

<sup>34</sup> Santiago Mir Puig, *El Derecho Penal en el Estado Social y democrático de derecho*, Barcelona, Editorial Ariel S. A., 1994, p. 115

de la norma penal, el Estado utiliza a la Policía. Dicha institución, que representa la fuerza en su estado más puro, se concibe con el objetivo velar por la seguridad ciudadana y el orden público, limitando su actuar al respeto de las garantías y derechos ciudadanos establecidos en la Constitución.

Como indica Ricardo Levene: *“las normas jurídicas no son suficientes para obtener una vida social pacífica; se requieren también órganos o instituciones que faciliten su vigencia”*<sup>35</sup>. Así, el Estado pretende que la institución policial se identifique con el ciudadano común, saliendo a las calles y garantizando el orden interno y la seguridad ciudadana.

De aquí que la presencia de los miembros de la policía en las calles se lo debe tomar como la presencia misma del Estado, el cual está dotado de ciertas atribuciones que el ciudadano común no las tiene como: portar un arma de fuego o privar de su libertad al supuesto delincuente, permitiéndole con ello rechazar actos que lesionen el orden jurídico establecido. Sin embargo, sus atribuciones tienen un límite establecido en la Constitución como: a) la no agresión al supuesto infractor, respetando en todo sentido su integridad física y su derecho a la vida y b) la imposibilidad de determinar qué delito es y quién es el responsable, por cuanto esta tarea se la encarga únicamente al juez dentro de un proceso penal.

Uno de los delitos que ha tomado auge en nuestra sociedad ecuatoriana es el tráfico, producción, tenencia de sustancia estupefacientes y psicotrópicas. Cuando el agente policial procede a la detención de ciudadanos en posesión de tales sustancias, el Estado, a través de la policía, cumple con su deber de prevención, para evitar que se

---

<sup>35</sup> Ricardo Levene (h), *Manual de Derecho Procesal, Tomo I*, Buenos Aires, Depalma Ediciones, 1993, p. 3

cometan una serie de delitos que aparentemente se desencadenan por la sola posesión de tales sustancias.

Ahora, el problema no termina con la detención: una vez puestos a manos de las autoridades, la formalidad que justifica el actuar policial, es decir, el parte, condiciona decisiones de carácter judicial, como la adopción de medidas cautelares. En este tipo de delitos, Fiscalía hace generalmente un uso frecuente de la prisión preventiva, guiados por una categorización de peligrosidad injustificada contenida en el documento en mención, evento que transgrede la garantía de que toda persona es considerada inocente hasta que su culpabilidad sea declarada mediante una resolución firme o sentencia ejecutoriada<sup>36</sup>.

Esta situación es alarmante pues ya a breves rasgos nos remite evidencias de que en los casos de ilícitos de drogas, el parte policial constituye una sentencia anticipada. Los jueces, sin el aporte de ninguna otra prueba, y con el solo añadido de las declaraciones de los policías mencionados en dicho documento, llegan a dictar sentencia declarando la culpabilidad del involucrado o mencionados en el parte policial. De esta manera, se distorsiona el procedimiento penal y se provocan tremendas injusticias, al instituirse *“una práctica por la que se presumía la culpabilidad con el parte policial”*<sup>37</sup>.

El Estado ecuatoriano se basa en una Constitución la cual prevé principios y garantías fundamentales para la sociedad, ordenamiento que tendría que ir de la mano de las normas penales existentes. La supremacía constitucional claramente establece que todo funcionario judicial tiene que aplicar las normas constitucionales. Sin embargo, en el tema de personas que han sido puestas a órdenes de un juez por el delito

---

<sup>36</sup> Constitución de la República del Ecuador, artículo 76 numeral 2

<sup>37</sup> Ramiro Ávila Santamaría, *La Penalización de lo irrazonable*, texto que figura como prólogo de la obra *“Entre el control social y los derechos humanos, Los retos de la política y la legislación de drogas”*, ... p. XIII, XIV

de tenencia de drogas, se vulnera su derecho a la libertad, intrínseco de toda persona, vulnerando su presunción de inocencia. Pues inmediatamente que es sorprendida con cantidades pequeñas de drogas, se procede a su detención para luego verificar si la cantidad que llevaba consigo sobrepasa el límite que permite la ley. Es más, existen casos en los cuales para evitar detenciones arbitrarias se acomoda el parte informativo a la realidad normativa existente. Por ejemplo, y como se analiza en el capítulo 3, en el caso 6, se tiene a una persona detenida por 16 años sin solucionar su situación jurídica.

De esta forma, se llega a desarrollar todo un proceso judicial, desconociendo totalmente la inocencia y pasando por alto el hecho que estas personas pueden ser consumidores. Este tipo de proceder, como se puede observar, pone en entredicho, el que los derechos humanos sean un mecanismo que sirve para la protección del más débil, pues como indica Ramiro Ávila Santamaría: *los derechos son para todas las personas y se ejercen cuando uno es el más débil. Todas las personas, en determinadas circunstancias, somos débiles*”<sup>38</sup>.

Sólo cuando se elimine la tortura y otras prácticas ilegales dentro de la investigación policial, y el fiscal, lejos de constituir un ente pasivo en la misma, sino una autoridad que vele por el cumplimiento de la Constitución y la ley, se evitaría que medios investigativos violatorios de toda garantía constituyan la regla del trabajo policial.

Es necesaria la depuración del proceso en esta clase de delitos; la emisión de directrices técnicas en la recolección de evidencias suficientes, que respeten los principios probatorios; y, que exista especialización del personal policial adecuada para este tipo de delitos. La complejidad en la detección y determinación de existencia de

---

<sup>38</sup> Ramiro Ávila Santamaría, *La (In) Justicia Penal en la Democracia Constitucional de Derechos, ...* p. 44, 52

este delito demanda profundizar en los medios que deben ser empleados para los efectos.

No se debe admitir la criminalización por parte de la policía en los delitos de droga. El parte policial debe ser un informe objetivo, en el que el agente policial ponga a conocimiento de la autoridad competente hechos susceptibles de ser comprobados a la luz de medios técnicos suficientes, que respeten el orden instituido procesal. El documento, per se, nunca debe ir más allá de su carácter informativo, incursionando en el nivel de establecer el delito con anterioridad a un proceso.

## **CAPÍTULO II. El valor probatorio del parte policial ecuatoriano dentro de la criminalización secundaria y su aplicación en los juicios de tenencia de drogas**

Para iniciar el presente capítulo se debe tener presente que la finalidad primaria de la prueba es la demostración de la verdad; no la verdad real que sucedió antes del proceso penal, sino la verdad formal que permita reflejar en el ánimo del titular del órgano jurisdiccional:<sup>39</sup> Juez de Garantías Penales la certeza o duda respecto de la existencia o inexistencia pretérita del hecho controvertido -delito- De tal suerte que, la prueba es el factor básico sobre el que gravita todo el procedimiento penal. De ella depende cumplir con el fin último de la Administración de Justicia en la órbita Procesal Penal, encontrar la verdad.

Razón por la cual, el vigente Código Orgánico Integral Penal, en el Libro II, título IV, establece cuatro capítulos que incluyen a los artículos 453 hasta 518 y que tratan sobre la prueba, disponiendo que debe ser judicializada ante los miembros del Tribunal de Garantías Penales, dejando como excepción al testimonio urgente, que puede ser practicado por los Jueces de Garantías Penales durante la instrucción, que pueden alcanzar el valor de pruebas una vez que sean practicadas y valoradas en la etapa del juicio.

Para comprender el significado de la prueba hay que distinguir los siguientes aspectos básicos:

La actividad probatoria;

El significado común de la prueba;

El propósito de la prueba; y,

---

<sup>39</sup> Entiéndase por: “verdad sustancial o materia, es decir, una verdad absoluta y omnicomprendiva en orden a las personas investigadas, carente de límites y de confines legales, alcanzable con cualquier medio más allá de rígidas reglas procedimentales” (...) “verdad formal o procesal, alcanzada mediante el respeto a reglas precisas y relativa a los solos hechos y circunstancias perfilados como penalmente relevantes”. Tomado de Luigi Ferrajoli, *Derecho y Razón*, ... p. 44 y 45

Los medios de la prueba.

Es necesario que antes de ejercer la acción penal, cualquiera que sea esta, concentrarse en la febril actividad probatoria. En la práctica la actividad probatoria ha de ser tan versátil que permita al operador y/o administrador de justicia tener la certeza o la duda de la existencia del acto ilícito y la responsabilidad penal del procesado. Puesto que, se debe tener presente que en el campo penal, generalmente, el infractor actúa busca no dejar huellas o señales del acto delictivo que puedan presentarse como pruebas de cargo en su contra<sup>40</sup>. En tal virtud, nace la necesidad y hasta la obligación ética de investigar todos los indicios que nos permitan demostrar la existencia del delito y la culpabilidad del infractor.

No se puede eludir la actividad probatoria. Más aún, si tenemos presente que la Fiscalía General del Estado lidera el monopolio de la acción penal pública como representante del Estado, es la encargada de investigar y acusar, así como de encontrar méritos en su investigación. Razón por la cual, tiene la obligación de estructurar técnicamente medios probatorios de cargo y de descargo, que a futuro serán judicializados en la audiencia de juzgamiento. De aquí que dicha institución está en la obligación constitucional y legal de empoderarse de la actividad probatoria.

Lo mencionado no significa que las demás partes procesales estén exentas de la obligación de contribuir al completo esclarecimiento de la verdad. No en vano el vigente Código Orgánico Integral Penal estructuró el sistema procesal penal oral adversarial. Aun cuando la presunción de inocencia asiste a toda persona, el sistema judicial hace que los investigados tengan que aportar la prueba que servirá de descargo, vulnerando toda garantía dentro del estado de derecho. Así, la defensa técnica está en la

---

<sup>40</sup> Walter Guerrero Vivanco, *La Prueba Penal*, Quito, Edit. Pudeleco, 2004, p.1

obligación de hacer un examen de la situación real del problema, que permita sostener con firmeza la tesis de la inocencia.

Toda persona que es encontrada por los agentes del orden público, y que tenga consigo una cantidad indeterminada de algún tipo de sustancias sicotrópica o estupefaciente, automáticamente es sujeto de investigación. El agente policial ejecuta su rol procediendo a la inmediata aprehensión. Sin embargo, es ahí donde surge la actividad dirigida al encuentro de los primeros elementos probatorios que la defensa tendrá que recopilar para presentar ante el juzgador. En este punto se debe considerar que una adecuada defensa técnica debe partir de una adecuada actividad probatoria. Generalmente la prueba de cargo o de descargo debe ser buscada y encontrada, con la condición de que -la misma- trabaje con y para la verdad<sup>41</sup>.

La actividad probatoria es uno de los aspectos más importantes del concepto general de la prueba. Los actores del proceso penal tendrán que realizarla, “...*la prueba es el conjunto de actividades destinadas a obtener el cercioramiento judicial acerca de los elementos indispensables de la decisión de un litigio*”<sup>42</sup>. La vigilancia y dirección del proceso investigativo recae sobre el órgano estatal Fiscalía, que a su vez cuenta con el apoyo auxiliar de investigación de la Policía en el tema de tráfico de drogas. Los agentes antinarcóticos se presentan ante el juzgador y a través de sus testimonios concatenan el hecho con las pruebas existentes, que culminará con la obtención de una sentencia cualquiera sea el tipo de ésta.

Jaime Guasp, sostiene: “... *las simples alegaciones procesales no bastan para proporcionar al órgano jurisdiccional el instrumento que éste necesita para la emisión de su fallo. El juez, al sentenciar, tiene que contar con datos lógicos que le inspiren el*

---

<sup>41</sup> Juan Isaac Lovato, *Programa Analítico de Derecho Procesal Civil*, Quito, Editorial Jurídica, 2013, p. 73

<sup>42</sup> Ricardo H. Levene, *Manual de Derecho Procesal Penal*, Buenos Aires, Editorial Depalma, 2008, p. 323



*sentido de su decisión, pero no con cualquier clase de datos de este carácter solo con aquellos que sean, o por lo menos, le parezcan convincentes, respecto a su exactitud o certeza. Tiene que haber, pues actividad complementaria de la puramente alegatoria, dirigida a proporcionar tal convencimiento, actividad que, junto con la anterior integra la instrucción procesal en el proceso de cognición, y que es, precisamente, la prueba.”*<sup>43</sup>

Estableciendo entonces, que la prueba es la confirmación de un hecho determinado y singularizado, a decir del doctor Hernando Devis Echandía<sup>44</sup>, a fin de distinguir el concepto común del concepto jurídico de la prueba, cuando sostiene que: *“en vez de hablar de demostración de la verdad material y de demostración de la verdad legal o formal de un hecho, es mejor decir que procesalmente probar es la demostración legal de un hecho, porque así se comprenden los varios sistemas que la Ley procesal puede consagrar para la producción y valoración de la prueba.”* Con lo cual, añade el elemento de legalidad a la demostración de la verdad.

Por lo tanto, la prueba es la demostración legal de un hecho determinado. Por esta razón, se requiere que el objeto de la prueba esté alineado con el objeto del proceso, para que se dicte sentencia condenatoria o ratificatoria del estado de inocencia. El Tribunal de Garantías Penales debe tener absoluta certeza sea de la inocencia o culpabilidad del procesado, sea de la existencia o inexistencia de la infracción, y de existir duda, por pequeña que sea, siempre se aplicará lo más beneficioso para la persona investigada.

Para ello se debe tener presente que, las presunciones no se prueban en el proceso penal, por lo tanto, no pueden generar valor probatorio alguno, se prueban los

---

<sup>43</sup> Juan Isaac Lovato, *Programa Analítico de Derecho Procesal Civil*,... p. 73

<sup>44</sup> Hernando Devis Echandía, *Teoría General del Prueba Judicial*, Bogotá, Editorial Temis, 2006, p.

indicios y en consecuencia ellos sí pueden demostrar positivamente la autoría y la existencia de la infracción. El Código Orgánico Integral Penal, como norma legal específica, establece las reglas que tiene que respetar el juez para seguir el camino inductivo-deductivo de las presunciones. Es la Constitución de la República del Ecuador quien originalmente y de manera primaria establece dicho camino, al determinar que las pruebas deben ser pedidas, practicadas e incorporadas al proceso, enmarcados en principios enunciados por la norma penal vigente. Cabe exaltar que la prueba puede ser excluida y carecerá de eficacia probatoria cuando se ha violado derechos constitucionales o de los previstos en instrumentos internacionales.

Queda claro que, el parte policial carece de valor probatorio. Procesalmente puede ser utilizado únicamente como fuente de información para revelar datos concretos y específicos del hecho fáctico criminoso. La relatividad de la apreciación de la prueba se debe al método que se aplica para valorar su veracidad, mismo que queda -en una gran parte- encomendada al juez, en razón de su experiencia y conocimiento teórico<sup>45</sup>.

Esto no es tarea fácil, porque demanda un despliegue enorme de conocimientos y técnicas investigativas, que se dificulta cuando se pretende llevar la prueba al ámbito de la ciencia. Pues, por su inconsistencia y trivialidad, jamás habrá certeza absoluta sobre el hecho fáctico que se investiga, ya que esto depende de la aprehensión de la realidad, misma que si no está sujeta a métodos estrictos y comprobables, deja un margen de error. Dependiendo del caso o causa que se analice, es el juez el llamado a utilizar la experiencia y su juicio crítico en la valoración de la prueba para evitar errar o actuar pruebas innecesarias; lo cual es posible si el método de valoración es libre.

---

<sup>45</sup> Fondo de Justicia y Sociedad.- Fundación ESQUEL-USAID, *La evolución del Sistema Procesal Penal en el Ecuador*, Quito, Esquel, 2004, p. 110

Es importante indicar que el proceso de búsqueda, a través de la prueba, puede llevar a una verdad formal o jurídica de un hecho delictivo. Toda vez que los medios de apreciar la verdad del hecho se sujeten a normas escritas que pueden limitar el acto de aprendizaje de la verdad material o real. Pero más allá de los silogismos, la verdad material y formal debe necesariamente juntarse. De lo contrario, decaería el proceso de administrar justicia en el entredicho de que es solo una la verdad.

Muchos tratadistas sostienen que este proceso de búsqueda sometido a normas jurídicas, que constriñen y definen su pureza lógica, no puede ser considerado como elemento para llegar a la verdad de un hecho criminal. Sino más bien, sirve para la fijación o determinación de los propios hechos que pueden o no coincidir con la verdad de los mismos. Pues los hechos objetivos o materiales pueden separarse de las apreciaciones formales en determinado acto<sup>46</sup>.

El juez dentro de la prueba jamás podrá utilizar percepciones que haya tenido fuera del proceso sobre un hecho que se encuentra por demostrar a través de la prueba. Tampoco solo meras apreciaciones subjetivas. De ahí deviene la necesidad de que la prueba sea de aquellas que le son permitidas al juzgador. Lo que busca es la verdad formal a diferencia de la verdad material que debería ser una sola en la práctica, pero en estricto derecho la verdad deberá probarse.

La prueba debe diferenciarse del procedimiento para su verificación. Por su parte los hechos solo se conocen no se comprueban. En lenguaje común, la prueba no solo designa la comprobación sino el procedimiento y la actividad usada para la comprobación. La prueba puede ser utilizada como cargo o atribución o como descargo

---

<sup>46</sup> Valls J. Bernal, *El falso testimonio*, Madrid, Edit. Tecnos, 1992, p. 25

o exculpación del hecho fáctico. No solo quien comprueba activa la prueba. Es evidente que los que afirman o niegan pueden probar sus decires<sup>47</sup>.

Por lo referido, el Juez de Garantías Penales debe ser técnico al emitir una sentencia. Sus decisiones no solo que deben ser debidamente fundamentadas, sino también debe plasmar su idoneidad y verticalidad de análisis tanto de hechos fácticos como normas legales para expresar las razones que surgen de la prueba obtenida y en este marco encasillar las conductas que conllevan a una decisión judicial. Ésta última debe sustentarse en “*principios de la lógica, la experiencia común, la sicología y el recto entendimiento humano.*”<sup>48</sup>. En corolario, cada medio de prueba debe ser analizado o valorado en forma individual y singularizada, pues uno de ellos puede ser determinante para que el Juez de Garantías Penales llegue a la certeza de la culpabilidad o inocencia del procesado. Finalmente, se debe aclarar que el juez es el único que puede valorar la prueba, ya que las partes procesales tienen un dinamismo crítico sobre la prueba presentada.

En lo que respecta puntualmente al tema de la presente investigación, queda claro que el parte policial única y exclusivamente informa mas no prueba. Su rol procesal se limita a ser fuente de información y no a ser medio de prueba. Por lo tanto, ninguna decisión judicial, llámese resolución, sentencia o fallo puede instituirse en su valoración probatoria.

## **2.1. El parte policial como simple noticia críminis en la realidad ecuatoriana**

Antes de abordar el tema propuesto, resulta prioritario esclarecer ¿qué es el parte policial? y ¿qué es la noticia críminis? para posteriormente referirnos a la incidencia o no de este documento en el quehacer jurídico nacional.

---

<sup>47</sup> Luis Cueva Carrión, *La prueba en el juicio oral penal*, Quito, Ediciones Cueva Carrión, 2004, p.

13

<sup>48</sup> Eduardo M. Jauchen, *Tratado de la Prueba en Materia Penal*, ... p. 48-49

***El parte policial.-*** Al respecto se debe tener presente que toda actividad desplegada por la Policía Nacional en el curso de un hecho punible debe evidenciarse a través de un medio escrito (parte policial), con la finalidad de individualizar a él o los autores y de singularizar el acto criminoso que se imputa, mediante el examen de las evidencias forenses. Por lo tanto, bien se podría manifestar que el parte policial es la narración de un hecho delictivo sujeto al procedimiento investigativo, que despliega la autoridad competente. En este caso, el mencionado documento lo realizan los miembros de la Policía Nacional, y a través de éste, se incluye la entrevista de las personas que participaron y/o presenciaron el hecho que se indaga.

También se puede conceptualizar al parte policial como el documento escrito que redactan, en el lugar de los hechos, los miembros de la Policía Nacional cuando existen motivos fundados del cometimiento de un hecho punible. En este documento se expresa el tiempo, el modo y la forma en que ocurrió una conducta presumiblemente delictiva. Por tanto, este documento da fe pública al plasmar un hecho ocurrido. Una característica importante es que el parte policial tiene carácter público por el hecho de ser realizado por un funcionario público competente (en este caso la Policía Nacional), quien está facultado constitucional y legalmente para tal efecto.

El parte policial es un documento legal utilizado por los cuerpos de seguridad del Estado, para la descripción detallada de un hecho punible con el fin de dar a conocer tanto la actuación de un funcionario policial, en un determinado lugar, como de las características del hecho descrito. De ahí que el documento tenga requisitos de forma a cumplir y sea del tipo solemne y formal, al ser una de las herramientas fundamentales del procedimiento policial. En el proceso penal, el documento en cuestión reviste de importancia a la hora de valorar lo ocurrido por su versatilidad informativa, debido a

que narra los presuntos hechos ocurridos en cuanto al procedimiento realizado e investigado por el cuerpo investigación policial.

Entre los datos que facilita el parte policial están: la fecha, la hora, ante quién y por quién se practicó la investigación y la forma cómo se la realizó. Es un documento que obedece a una de las funciones de la Policía Nacional.

***El parte policial web.-*** En la actualidad, dada la versatilidad del parte policial, el Consejo de la Judicatura y el Ministerio del Interior implementan acciones para poner en marcha, a nivel nacional, el parte policial web o virtual con el objetivo de que este documento formalice la detención de la persona acusada de delito flagrante. Por esta razón, se procura que el documento esté elaborado en coordinación con el fiscal de turno en máximo 45 minutos. Antes, este trámite tomaba entre seis y ocho horas. Esta nueva herramienta evita, entre otras cosas, que la Policía tipifique, en el parte respectivo, el delito supuestamente cometido, ya que esa es una potestad del juez o del fiscal.

El parte policial dentro del quehacer jurídico nacional tiene gran importancia por los siguientes aspectos:

Permite al Policía Nacional informar a sus superiores del trabajo realizado y el rendimiento obtenido;

Es el respaldo legal de la actuación policial que avala el procedimiento seguido ante la sociedad por las autoridades superiores de la Policía Nacional, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública y los Juzgados y Tribunales de Garantías Penales;

Se constituye en la fuente más directa e idónea de información sobre los hechos pretéritos investigados.

**Noticia críminis.-** Éste es el nombre genérico bajo el cual tradicionalmente se han reunido los distintos medios por los cuales podía iniciarse la actividad de la justicia penal, mediante la promoción del proceso. Así, ya sea por la denuncia, ya por la querrela, o por la prevención policial (parte policial) o de oficio, se lleva ante la jurisdicción una noticia sobre la comisión de un delito, la misma que opera como “*información institucional*”, sujeta a recaudos específicos impuesto por la ley procesal y capaz de producir efectos jurídicos previamente previstos por la ley<sup>49</sup>.

La Noticia Críminis o Notitia Criminis es la noticia criminal. La cual, como su nombre lo indica, es la forma o manera en que se da a conocer el cometimiento de un hecho que riñe con la ley, que puede ser calificado como delito. A través de ella, el ente encargado de la investigación criminal (Fiscalía General del Estado) obtiene información sobre cómo se cometieron los hechos antijurídicos.

A partir de la noticia criminal, la Fiscalía General del Estado pone a trabajar toda su logística para determinar la forma, el tiempo, el lugar y las circunstancias en que sucedió el hecho. Sirve para estructurar la plataforma fáctica, para lo cual, se debe realizar una investigación objetiva, que no puede inclinarse a favor de ninguno de los posibles sujetos procesales, en materia penal. “*Es el Estado el que debe probar su culpabilidad para destruir el estado de inocencia, incluso hasta debe investigar la posibilidad de que hayan existido aquellas excusas o justificaciones alegadas por el imputado con independencia de la prueba que éste introduzca al respecto*”.<sup>50</sup>

En este contexto, es necesario sustentar la información con pruebas obtenidas a través de medios lícitos, pues de no hacerse de esa manera se encontrará con prueba

---

<sup>49</sup> José A. Garrone, *Diccionario Jurídico*, Buenos Aires, Editorial LexisNexis, 2005, p. 462

<sup>50</sup> Eduardo M. Jauchen, *Tratado de la prueba en Materia Penal*, ..., p. 38-39

ilícita. La noticia críminis es, en pocas palabras, el medio a través del cual se informa a las autoridades pertinentes sobre el cometimiento de un acto criminal.

## **2.2. El ejercicio del poder punitivo y el rol de la policía antinarcótics**

El ejercicio del poder punitivo del Estado debe ser entendido como la facultad constitucional y legal a través de la cual el Estado ecuatoriano realiza las acciones necesarias para la investigación, juzgamiento, sanción y reparación del acto delictivo. Es decir, se constituye en la puesta en marcha de la acción penal pública. A la vez, constituye el núcleo material que delimita el ejercicio de la función pública y la responsabilidad de las autoridades, en el terreno de la coerción a las personas que han vulnerado el ordenamiento jurídico, en un tiempo y en un espacio determinado.

El Estado debe procurar limitar el exceso del poder punitivo. Así, en un Estado de derecho, la intervención policial y el poder punitivo solo se podrían aplicar si se hubiera vulnerado un bien jurídico tutelado, cuya alteración genere una verdadera conmoción para la sociedad. De aquí que el poder punitivo se supedita a las garantías establecidas. Como dice Quintero si bien, el poder punitivo “...*ha sido utilizado como aparato represivo para conservar el orden*<sup>51</sup>”, en la actualidad se busca contener el poder punitivo ejerciendo un control limitador que busca la humanización de las penas.

Sin bien, en siglos pasados, la pena era concebida como el castigo a una conducta impropia que vulneraba al bien jurídico protegido por una sociedad determinada, en la actualidad tal concepción queda atrás debido a los vientos revolucionarios del neoconstitucionalismo y el garantismo constitucional cuyo influjo ha llevado a establecer el nuevo rol jurídico-legal de la pena como el medio idóneo para la rehabilitación y reinserción del ser humano en toda su integridad acorde con las altas

---

<sup>51</sup> G. Quintero, *Política Criminal y Determinación de la Prueba*, Buenos Aires, Editorial Política Penal, 2010, p. 66



demandas del principio universal pro homine. Inclusive se aborda el proyecto de vida que desean alcanzar.

Un procedimiento legítimo y legal en delitos de tenencia de drogas se sustenta en la comprobación de presupuestos, con los que se ratifica el estado de inocencia o se declara la culpabilidad de un sujeto. Los hechos que se investigan y juzgan deben orientar la comprobación de la conducta constitutiva de delito, reconstruyendo a través de los vestigios o resultados de éste, el evento primigenio que justifica la teoría propuesta por el ente investigador.

El delito de “*tenencia, posesión o uso de sustancias sujetas a fiscalización*”, enmarca los verbos rectores como “*tener, poseer o usar*”. Si bien estos verbos pueden definir una amplia gama de conceptos o ideas indeterminadas, que suponen un riesgo inminente para la sociedad, por lo que el Estado delega el poder punitivo constitucionalmente prohibido<sup>52</sup>, a las agencias ejecutivas, que controlan conductas que no se enmarcan en la armonía social.

El *ius puniendi*, que es característico y particular del Estado, refleja la necesidad concentrada del conglomerado de que se imponga un resultado jurídico a un determinado sujeto infractor de la norma penal, cuya conducta lesiona con gravedad aspectos sensibles considerados especiales por el ordenamiento. El hombre común, que renuncia a la venganza para trasladar su anhelo legítimo de represalia a la persona jurídica colectiva que lo representa<sup>53</sup>, espera que, en el camino del juzgamiento, el ente judicial no desborde con excesos la potestad de imposición de castigos conferida legítimamente por el acuerdo social.

---

<sup>52</sup> Eugenio Raúl Zaffaroni, *Derecho Penal, Parte General*, Buenos Aires, Sociedad Anónima Editora, Comercial, Industrial y Financiera, 2da. Edición, 2002, p. 11

<sup>53</sup> César Bonesana Marqués de Beccaria, *Tratado de los Delitos y de las Penas*, Bogotá, Editorial HELIASTA S.R.L., 1993, p. 128

El castigo impuesto en delitos de peligro abstracto puede ser ineficaz al momento de analizar la lesividad provocada. Solo después de un trámite judicial se puede establecer si fue o no adecuada la pena aplicada a delitos de sospecha, en los que en definitiva se estaría violando toda garantía procesal.<sup>54</sup>

Ahora bien, para combatir de manera adecuada el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, se debe implementar a plenitud políticas estatales de salud pública. Es entonces que nos preguntamos ¿qué hace el Estado a través de sus representantes, en cuanto al consumo de drogas como tal? ¿Acaso los agentes policiales que toman procedimiento directo están capacitados para diferenciar quien es un consumidor y quien es un traficante? La respuesta es sencilla, pues dichos agentes no tienen noción alguna del tema planteado, limitándose a realizar un trabajo que debe cumplir con estadísticas que exigen sus funciones.

El Estado ecuatoriano cuenta con la Policía Antinarcoóticos, cuyo desafío se concentra en fortalecer la lucha al problema de las drogas ilícitas y sus actividades conexas. Actualmente, también se cuenta con una Secretaría Técnica de Drogas (SETED), cuya función será la “*prevención, erradicación y asistencia social*”<sup>55</sup>. Es lógico entonces pensar que toda esta inversión estatal debe conllevar resultados de mejoras y bienestar a la colectividad. Sin embargo caemos en fortalecer un aparataje estatal burocrático.

El rol de la Policía Antinarcoóticos se puede resumir en la prevención y combate del tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y todas las actividades conexas, rigiéndose estrictamente a lo dispuesto en el Código Orgánico Integral Penal. Es decir, observar las formalidades constitucionales, legales y reglamentarias en cuantas

---

<sup>54</sup> Edgardo Alberto Donna, *Delitos de Peligro—I*, en *Revista de Derecho Penal* 2007-2, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, 2007, p.562 a 564

<sup>55</sup> <http://www.andes.info.ec/es/noticias/secretaria-tecnica-drogas-inicia-acciones-integrales-combatir-microtrafico-ecuador.html>

diligencias les corresponda practicar, con inclusión de los operativos y se abstendrán bajo su responsabilidad, de usar medios de averiguaciones violatorias a los derechos humanos consagrados por la Constitución de la República del Ecuador, los Convenios Internacionales de Derechos Humanos y las leyes de la república.

De hecho, la labor de la Policía Antinarcóticos debe quedar supeditada a lo que estrictamente le corresponde como investigadores. Esto es, buscar huellas, vestigios, instrumentos y documentos que tengan relación al tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Así también deberá buscar los mismos indicios en todas las actividades conexas, e indagar a los presuntos autores y cómplices pero absteniéndose de hacer otra clase de interpretaciones. Sin embargo, en la práctica, de manera general, la investigación nace por llamadas anónimas a la línea 1800DROGAS, protegiendo la identidad de las personas que denuncian. Como consecuencia, se inicia un operativo donde solo actúa el agente policial, llegando a un proceso judicial, que se contrapone con principios de los derechos humanos. *“Como no podía ser de otra manera, se construye una institucionalidad que se encarga del control y la fiscalización, y juega un rol preponderante en la penalización.”*<sup>56</sup>

El artículo 364 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que las adicciones son un problema de salud pública. El Estado es el encargado de salvaguardar el bienestar de la sociedad, por lo que el representante del Ejecutivo hace un análisis para determinar cantidades referenciales para el consumo personal. Ahora bien, el proceso para llegar a cuantificar cantidades máximas tolerables de tenencia de estupefacientes, debe basarse en parámetros técnicos biológicos, psicológicos, sociológicos, etc. Sin embargo, la realidad es que se sigue criminalizando la pobreza lo

---

<sup>56</sup> Juan Pablo Morales Viteri, “Un nuevo esquema legal para las drogas”, en *“Entre el control social y los derechos humanos, Los retos de la política y la legislación de drogas”*, ... p. 305

que puede evidenciarse en las Unidades de Flagrancia de la Función Judicial, donde día a día se procesa a personas adictas. Una muestra de esta realidad es que generalmente las personas procesadas tienen niveles bajos de educación y no dispone de un trabajo estable sino se dedican a la realización de oficios. Este hecho se evidenció en los casos analizados en el capítulo 3.

Por su parte, la prensa cumple en hacer conocer a la colectividad el trabajo del Ejecutivo. Un ejemplo entre tantas noticias de ese orden es lo manifestado por el Consejo Directivo del CONSEP, que tiene por fin castigar al micro-traficante, para evitar que se amparen en maniobras legales y evadan la justicia. Sostienen que con la puesta en vigencia de la nueva tabla valorativa, la sociedad espera y aspira establecer mejores controles que en la práctica permitan una real fiscalización. De esta manera se busca sancionar al tráfico de drogas con la respectiva prisión para quien ha incumplido la norma legal<sup>57</sup>, en función del tipo de sustancia y la cantidad según las cuatro escalas establecidas en la norma<sup>58</sup>. Respecto de las adicciones se refieren de manera muy escueta, pues el enfoque primordial es hacer conocer las duras sanciones que se impondrán y todo el mecanismo punitivo que el Estado manejará para erradicar el tráfico en mínima escala. De ahí que salta la interrogante sobre qué pasa con la prevención, el tratamiento y la erradicación de la colectividad que está inmersa en el consumo de drogas. Dicho de otro modo a la par de las sanciones para controlar la tenencia de la sustancia ¿cuántos centros estatales funcionan en el país para la atención de adictos?

Sin embargo, cabe reiterar las críticas sustentadas en los escasos resultados en materia de prevención. Debido fundamentalmente a: la excesiva burocratización de los

---

<sup>57</sup> <http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-fortalece-lucha-contramicrotráfico-nueva-tabla-sancionar-posesion-drogas.html>

<sup>58</sup> Código Orgánico Integral Penal, artículo 220, numeral 1, literal a), b), c), d)

procesos, la planificación irreal, la ausencia de espacios de comunicación y coordinación de operativos entre los distintos actores involucrados; así como también de la carencia de metodologías y enfoques propios y la desarticulación entre las posiciones directivas y ejecutoras. Todo lo cual, justifica un replanteo del funcionamiento de las entidades involucradas en el tema.

De lo observado se colige que, la función de la tabla valorativa en la que se establece las cantidades máximas admisibles de tenencia para el consumo personal es la de generar una base técnica y científica que permita a los jueces tener una guía adecuada para aplicar las sanciones de los ilícitos, entre los cuales no se considera como crimen el consumo.

### **2.3. El juicio penal en delitos de tenencia de drogas y los derechos constitucionales de los procesados**

En el Ecuador, y en varios países de Latinoamérica, nuevamente está en el debate jurídico-social, el tema del tráfico y micro tráfico interno de sustancias sujetas a fiscalización, así como de todas las actividades conexas. Particularmente, el tema de la tenencia para consumo de drogas, se ha vuelto noticia de todos los días. Las operaciones antinarcóticos involucran un exagerado ejercicio del poder punitivo del Estado en pro de erradicar el consumo y las posibles consecuencias que alrededor de este tema se genera.

Antes de referirnos particularmente al tema propuesto, se debe considerar que existen importantes disposiciones constitucionales que hay que tener en cuenta al momento de realizar cualquier análisis. Es menester precisar que la sustanciación de los procesos, en todas las materias, instancias, etapas y diligencias, debe llevarse a cabo mediante el Sistema Oral Adversarial, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo. Así como también, se ha de considerar los principios que

garantizan que los juicios y sus decisiones sean públicos, salvo los casos expresamente señalados en la ley.

La trascendencia del principio de publicidad no guarda relación con que las partes conozcan de antemano el lugar, día y hora de realización de la audiencia. Sino, constituye más bien un acto de transparencia e imparcialidad del órgano jurisdiccional con la sociedad, para que ésta pueda conocer y observar en forma directa cómo actúa la administración de justicia. Así, con este principio se proscribe el secretismo y las resoluciones a puertas cerradas.

Por otro lado, el principio de oralidad se desmarca del tradicional sistema escrito y reivindica el derecho de las partes de hacer escuchar sus razones y alegaciones. Para esto, se da una comunicación directa entre todos los intervinientes en el proceso. El principio de inmediación está íntimamente ligado al de oralidad, pues a través de la palabra hablada, se da un proceso comunicacional directo entre juez, acusador, acusado, auxiliares, etc., a fin de que cada uno tenga la oportunidad de construir una argumentación válida, que procure incidir en la convicción del juzgador en beneficio de su defendido.

Por su parte el principio de contradicción o de defensa contradictoria se usa para abogar, acreditar, desmentir o rebatir lo aseverado por cualquiera de las partes o auxiliares del proceso. En otras palabras, se busca hacer efectiva la contraposición de dos enfoques, en igualdad de oportunidades. El cumplimiento de los principios referidos da cuenta de la necesidad de su implementación en el sistema procesal acusatorio garantista.

Uno de los principios que merodea la actividad del juez es la garantía de su independencia interna, para que éste pueda responder por su decisión a su conciencia. De ahí que resulta inadmisibile que la decisión del juez se vea sujeta al cuestionamiento

ilegítimo, por una vía que no es la de un juez pluripersonal de instancia superior, subido en grado, por efectos de la interposición de un recurso vertical, claramente determinado en la ley. Por otro lado, hay que tener en cuenta, que los juicios y sus decisiones tienen que realizarse en audiencia pública en todas sus etapas, salvo los casos expresamente señalados en la ley.

Todas las garantías que envuelven la tramitación y sustanciación del proceso penal repuntan la esencia altamente garantista del nuevo paradigma estatal, basado en los conceptos constitucionales de derechos y justicia que busca a ultranza la realización plena, efectiva, oportuna y expedita de los legítimos derechos de las partes procesales, sobre todo de aquellos considerados como más vulnerables. Una de esas garantías básicas es precisamente el Debido Proceso, que en definitiva obliga al operador y/o administrador de justicia a la viabilización plena de todos y cada uno de los principios, reglas y derechos que giran en torno a la demostración de la existencia del hecho delictivo y de la responsabilidad penal del procesado.

A tono con lo referido anteriormente, en el numeral sexto, tercer inciso del artículo 454 del Código Orgánico Integral Penal se manifiesta que: *“Los partes informativos, noticias del delito, versiones de los testigos, informes periciales y cualquier otra declaración previa, se podrán utilizar en el juicio con la única finalidad de recordar y destacar contradicciones, siempre bajo la prevención de que no sustituyan al testimonio. En ningún caso serán admitidos como prueba.”*

Entre los derechos constitucionales que impiden que el parte policial mantenga la aseveración de culpabilidad del procesado y de la existencia irrefutable del delito son primordialmente la presunción de inocencia y el derecho a la defensa técnica;

***Presunción de inocencia.***- La presunción *juris tantum* de inocencia es universal. De acuerdo a la constitución del Ecuador, artículo 76, numeral 2: *“Se presumirá la*

*inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada.”*

Por lo que queda establecido que en el proceso penal la presunción de inocencia sólo se destruye judicialmente cuando la sentencia del Tribunal de Garantías Penales competente es condenatoria. Habiendo quedado en firme después de haber sido agotados los recursos ordinarios y extraordinarios previstos tanto en la Constitución de la República como en el Código Orgánico Integral Penal. La presunción de inocencia se encuentra normativamente contenida en nuestra Carta Magna como una de las garantías constitucionales del Debido Proceso. Sin embargo, y pese a su importancia y gran valía, día a día, como ocurre con la gran mayoría de derechos y garantías constitucionales del Debido Proceso Penal, es inobservada.

Esto significa que el *imperium* de inocencia está consagrado en el Estado ecuatoriano a favor del procesado, de tal manera que desde el momento en que se inicia un proceso penal, se mantiene el estado de inocencia como garantía procesal del Debido Proceso. *“La presunción de inocencia a más de ser una garantía constitucional, es sin duda una garantía procesal, que afianza el principio de inocencia y legalidad a fin de que exista un equilibrio entre el jus puniendi y el derecho de los coasociados”*<sup>59</sup>.

La importancia de la presunción de inocencia es trascendental tanto para el proceso penal, como para la convivencia social. Por tanto, se constituye en una garantía del Debido Proceso que asegura la promoción y vigencia de los derechos humanos, constitucionales y legales de las partes procesales, especialmente del procesado cuyo estatus jurídico procesal es significativamente vulnerable.

---

<sup>59</sup> Lenin Arroyo Beltrán, *Las garantías individuales y el rol de protección constitucional*, Guayaquil, Arroyo Ediciones, 2008, p. 170



La presunción de inocencia se funda en el principio del *in dubio pro homine*, en virtud del cual, a la persona humana se le presume inocente mientras la autoridad no le haya demostrado su culpabilidad judicialmente y la misma se encuentre motivadamente consignada dentro de una sentencia o resolución en firme. De este derecho se deriva que:

Las personas no son autores de delitos, en consecuencia sólo hay delitos y detenciones por actos, no por sospechas.

El acusado tiene derecho a no declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge ni sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Las personas no tienen la obligación de probar su inocencia de una acusación, salvo en determinados delitos, en cuyo caso se invierte la carga de la prueba.<sup>60</sup>

En consecuencia, se puede manifestar que a través de este principio, reconocido por la Convención Americana de Derechos Humanos y por la Constitución de la República del Ecuador, toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.

La presunción de inocencia, se extiende hasta que el proceso culmina con sentencia ejecutoriada. Se trata además de una presunción que no admite demostración en contrario, lo cual significa que aunque la evidencia sea incontrovertible, mientras no se haya dictado sentencia ejecutoriada, el procesado debe recibir el tratamiento de una persona inocente.

Héctor Faúndez Ledesma identifica al menos cinco efectos o consecuencias trascendentales de este principio:

La carga de la prueba le corresponde a la acusación.

---

<sup>60</sup> Luis Jiménez de Asúa, *La ley y el Delito*, Buenos Aires, Editorial Prólogo, 1958, p. 17

El procesado no está obligado a demostrar su inocencia, sino que ésta se impone en virtud de la presunción.

La calidad de la prueba debe ser tal que permita sustentar la condena más allá de toda duda razonable. Es la aplicación a la apreciación de la prueba del viejo principio *in dubio pro reo*.

La actitud del tribunal, llamado a garantizar los derechos del reo, evitando que, en virtud de la imputación, reciba un tratamiento incompatible con su condición de persona inocente; y,

La exclusión de consecuencias negativas antes de que se dicte sentencia definitiva y, por consiguiente, el derecho a la libertad durante el proceso.<sup>61</sup>

A estas consecuencias debería agregarse otra relativa a la interpretación de las normas procesales. Si el procesado es inocente, los casos de duda han de resolverse en el sentido que más le favorezca. El principio *in dubio pro reo* resulta así de la aplicación de uno más general, que gobierna la interpretación en el derecho constitucional y en el derecho internacional de los derechos humanos, este principio a de preferir la interpretación que resulte más favorable a la efectiva vigencia de las libertades y demás garantías. Esto significa que dentro de un proceso penal la parte acusadora es la que tiene a su cargo la demostración de la culpabilidad del procesado.

Por lo que resulta suficiente entender que “*Toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser tratada como tal, mientras no se ejecutorie una sentencia que determine lo contrario*”<sup>62</sup>. Debido a que se trata de un imperativo constitucional y legal que obliga a los operadores y administradores de justicia a

---

<sup>61</sup> Héctor Faúndez Ledesma, *El Derecho a un Juicio Justo*, Caracas, Editorial Universidad Central de Venezuela, 1992, p. 250

<sup>62</sup> Código Orgánico Integral Penal, artículo 4

respetar y hacer respetar tal estatus jurídico-procesal, aun cuando el procesado haya sido sorprendido en delito flagrante.

Por tanto, ninguna persona puede ser penada sino mediante una sentencia ejecutoriada, dictada luego de haberse probado los hechos y declarada la responsabilidad de dicha persona en un juicio. Éste último deberá estar sustanciado conforme a los principios establecidos en la Constitución de la República y en el Código Orgánico Integral Penal, con observancia estricta de las garantías previstas dentro del Debido Proceso. Es más, la base del juicio penal es la comprobación, conforme a derecho, de la existencia de la acción u omisión punible que se imputa al procesado. En síntesis, para que se pueda dictar una sentencia condenatoria, dentro del proceso penal, necesariamente deben constar tanto la comprobación de la existencia de la acción u omisión punibles, así como la responsabilidad penal del encausado.

El principio de inocencia implica que en todo proceso penal debe haber actuaciones probatorias o medios probatorios de culpabilidad del procesado, cuidando que no se desnaturalice la garantía constitucional consignada en el artículo 76 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, mediante la cual todas las personas gozan del estado de inocencia hasta tanto una sentencia ejecutoriada dictada con autoridad de cosa juzgada no la destruya declarando su responsabilidad penal.

Es evidente que el principio de inocencia constituye, sin duda, el presupuesto de seguridad jurídica en el Estado Constitucional de Derechos y Justicia. Además, la inocencia está protegida por los instrumentos jurídicos internacionales puesto de gran raigambre y legado histórico. Es más, todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Por tanto, no podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias, ni podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la Constitución de la República y ley, con arreglo al procedimiento previamente establecido.

Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma y notificada sin demora de la acusación formulada contra ella. Por consiguiente, al estar detenida o presa a causa de una infracción penal, será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales. Tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. En concreto, toda persona que sea privada de su libertad, en virtud de detención o prisión emanada de una autoridad competente, tendrá derecho a recurrir ante un Tribunal competente, a fin de que éste decida, a la brevedad posible, sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuere ilegal. Asimismo, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación de los daños. Esta premisa define de manera precisa el principio de legalidad, constituyéndose también en garantía del Debido Proceso.

***Derecho de defensa.***- El acceso a la justicia y, en especial, a la posibilidad de contar con la defensa técnica en juicio, dentro del Ordenamiento Jurídico Penal nacional, frente a la acción punitiva del Estado, en la actualidad –y pese a las reformas constitucionales y legales emprendidas –son verdades utópicas. La obligación del Estado hacia los ciudadanos que han sido víctimas de un delito es de igual entidad que su deber frente a los sujetos que han sido reputados autores de una conducta ilícita, razón por la cual, en ambas situaciones opuestas y/o dicotómicas, el Estado ecuatoriano está en la irrestricta obligación de implementar, a su favor, el derecho de defensa técnica del caso en igualdad de armas.

La defensa en juicio es indispensable para el ejercicio del derecho a un debido proceso legal y justo.<sup>63</sup> Sin esa garantía la idea de igualdad ante la ley se fragiliza. Pues esta se concreta a través del libre e irrestricto acceso a las instancias judiciales de los

---

<sup>63</sup> Fernando Velasco Velasco, *Derecho Penal General*, Bogotá, Editorial Tecno, 2007, p. 29

sectores más vulnerables de la sociedad, quienes padecen en mayor medida la acción del entramado judicial penal. Por lo que se infiere que, tanto nuestra ley primera como nuestra ley adjetiva penal prevén y garantizan el uso y goce del Derecho de Defensa, durante todo el proceso penal. Sin embargo, es a través de este concepto legal que se desarrolla toda una maraña que da cabida a la inconsistencia jurídica del Derecho de Defensa.

Un sistema de justicia democrático propio del Estado Constitucional de Derechos y Justicia debe asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a un servicio de asistencia legal de modo tal que se garantice su derecho a una defensa oportuna, veraz y eficiente en el proceso penal.

El derecho de defensa comprende la facultad de intervenir en el procedimiento penal abierto para decidir acerca de una posible reacción penal contra el procesado y por tanto permitir llevar a cabo en él todas las actividades necesarias para poner en evidencia la falta de fundamento de la potestad penal del Estado o cualquier otra circunstancia que la excluya o atenúe.

Estas actividades pueden sintetizarse en:

La facultad de ser oído, la de controlar la actividad probatoria de cargo que podrá utilizarse válidamente en la sentencia, la de probar los hechos que el mismo invoca para excluir o atenuar la reacción penal, la de valorar la prueba producida la Audiencia de Juzgamiento (judicialización de los medios de prueba) y exponer las razones, fácticas y jurídicas (argumentar, contra argumentar, debatir, contra debatir y ejercer el derecho a la réplica), para obtener del Tribunal de Garantías Penales una sentencia favorable según su posición, que excluya o atenúe la aplicación del poder penal estatal.

El derecho de defensa garantiza que esta facultad de intervenir dinámicamente dentro del proceso comience desde el mismo momento en que la persona es calificada como sospechosa, autora o partícipe del hecho por la autoridad competente (Fiscal).

Además la defensa material reside en la obligatoriedad de implementar la defensa técnica del caso, desde la primera oportunidad y fundamentalmente antes de la declaración del fallo, sentencia y/o resolución.<sup>64</sup>

Se considera así a la defensa técnica como un servicio público imprescindible, que viene a completar la capacidad del procesado para mantener su estatus jurídico de inocencia dentro del proceso penal, con facultades autónomas. Esto es, dichas facultades sólo se rompen por excepción, por ejemplo cuando el procesado decide renunciar a los recursos interpuestos por su defensor.<sup>65</sup>

La base esencial del derecho a defenderse reposa en la posibilidad de expresarse libremente sobre cada uno de los extremos de la imputación, incluyendo la posibilidad de agregar todas las circunstancias de interés para evitar o aminorar las consecuencias jurídicas posibles o para inhibir la persecución penal. No es sólo la posibilidad literal de verter palabras sino que la norma constitucional le da un contenido mucho más profundo, debiendo la ley de enjuiciamiento prever actividades previas y posteriores en relación al ejercicio de esta garantía, a fin de que ella se pueda constituir en el núcleo del derecho de defensa en juicio.<sup>66</sup>

De acuerdo con Clariá Olmedo, el desarrollo de estas necesidades formales es lo que se conoce como el principio de contradicción<sup>67</sup>. Por lo que cabe recalcar, que nadie puede defenderse de algo que no conoce. Es por eso que el próximo paso, a fin de

---

<sup>64</sup> Jorge Eduardo Vázquez Rossi, *Derecho Procesal Penal*, ... 2008, p. 111

<sup>65</sup> Julio B. J. Maier, *Derecho Procesal Penal*, Buenos Aires, Editores del Puerto, 1999, p. 145

<sup>66</sup> Raúl Gustavo Ferreyra, *Notas sobre Derecho Constitucional y Garantías*, Buenos Aires, Editorial Ediar, 2003, p. 76

<sup>67</sup> Clariá Olmedo, *Derecho Procesal Penal*, Córdoba, Editorial Marcos, 1984, p. 12

garantizar el derecho de defensa del sospechoso, es el de ponerlo en conocimiento de la imputación correctamente deducida. Darle a conocer al sospechoso aquello que se le atribuye, es lo que se conoce técnicamente con el nombre de “*intimación*”.

Jorge Zavala Baquerizo expresa que la defensa, como se sabe, puede ser formal o técnica. La primera es aquella en que el propio sospechoso asume su defensa, en los casos expresamente autorizados por la Ley. La defensa técnica es aquella en que la parte procesal se sirve de un letrado o Abogado para que lo represente en la investigación pre-procesal, así como durante el desarrollo del proceso y una vez concluido éste<sup>68</sup>.

El derecho a la defensa a su vez se descompone en:

el derecho a ser oído,

derecho a conocer todos los actos pre-procesales y procesales que se van fraguando en su contra,

derecho a no rendir testimonio sin la presencia de su defensor,

derecho a guardar silencio,

derecho a elegir a su defensor, obligatoriedad del defensor y si es el caso, de contar con un defensor de oficio que le garantice una defensa eficaz.<sup>69</sup>

La defensa, desde el punto de vista procesal, se la puede clasificar en general y en restrictiva. La defensa general es el derecho subjetivo que el Estado entrega a toda persona para que, en un momento determinado, pueda exigir la protección para sus bienes jurídicos e intereses antes y durante el desarrollo de un proceso. La defensa en sentido restringido es aquella que le corresponde al acusado en un proceso penal, para oponerse a las pretensiones que se exhiben en dichos procesos por parte del acusador, oficial, particular o privado, respectivamente.

---

<sup>68</sup> Jorge Zavala Baquerizo, *El Debido Proceso Penal*, Quito, Editorial Edino, 2002, p. 131

<sup>69</sup> Luis Jiménez de Asúa, *La Ley y el Delito*, ... p. 20

El derecho de defensa que corresponde a todo habitante del país, es el derecho de defensa general. Esto es, para aquellos que intervienen como partes procesales y se refiere de manera especial a cualquier procedimiento, no sólo al penal. Pues, el derecho de defensa permite al ciudadano intervenir desde la iniciación de una investigación hasta el desarrollo y conclusión definitiva del proceso. Lo contrario, significaría el ejercicio de un derecho de defensa diminuto. El mismo que es válido parcialmente, pero que jamás podría tener la efectividad que exige y que ordena, la Constitución de la República del Ecuador, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y la Ley en general.

Se priva del derecho de defensa a la persona que no puede oponerse a una investigación penal o de cualquier otra índole desde su inicio. Pues está incapacitada de desarrollar su teoría del caso, de plantear sus argumentos y debatir. Así como de exhibir sus medios de prueba y oponerse a la acusación fiscal. Esto es lo que se llama indefensión, actualmente inconcebible en el Estado Constitucional de Derechos y Justicia.

La sola presencia de la sospecha que origina la investigación permite el ejercicio del derecho de defensa, el cual está presente cuando la persona ostenta la calidad de sospechoso. En muchas ocasiones, es fundamental ejercer el derecho de defensa desde el momento en que una persona es considerada sospechosa, porque ésta puede hacer uso oportunamente de los indicios, presunciones, elementos de convicción que, con el transcurso del tiempo y mientras termina la indagación policial o fiscal, pueden desaparecer o deteriorarse, como sería el caso de los testigos que se ausentan del lugar o fallecen.

La constitucionalidad ecuatoriana, de esta manera, afirma enfáticamente que *“nadie puede ser privado del derecho de defensa”* y por ende, nadie puede quedar en el



Ecuador en indefensión. Ni desde la iniciación de un proceso investigativo como tampoco durante el desarrollo de un proceso. Privar de la defensa a un ciudadano, en cualquier estado o grado del respectivo procedimiento, es como atacar físicamente a una persona que está amarrada, imposibilitada para reaccionar frente a la agresión.

La defensa es y debe ser inviolable. Se viola la defensa cuando se ponen obstáculos ilegales para que los involucrados en un proceso de cualquier clase puedan exhibir sus pretensiones jurídicas y poner en marcha sus medios de prueba, o cuando se impide que hagan sus alegaciones en el momento oportuno. También se vulnera el derecho de defensa, cuando el acusado o su defensor son coaccionados moralmente durante la audiencia pública de juzgamiento; esto es, en donde no exista la suficiente tolerancia y serenidad para que se desarrolle el juicio de culpabilidad.

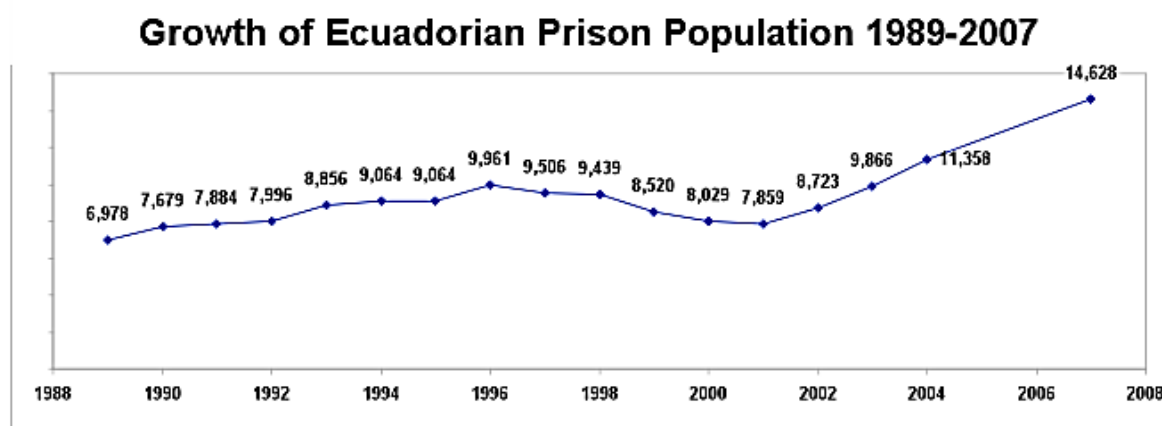
El derecho a ser atendido profesionalmente lo tiene tanto el acusador como el acusado. Para evitar la indefensión técnica, el Estado ha establecido la institución de los Defensores Públicos, quienes están encargados de representar a todos aquellos que carezcan de los medios económicos para contratar una defensa pagada o para aquellos que se niegan a nombrar un defensor, cualquiera que sea la causa.

El derecho de defensa no se limita a evitar que el ciudadano quede en indefensión, sino que el mismo se encuentre técnicamente asesorado y constantemente orientado antes, durante y en la culminación del proceso penal, de la investigación policial, fiscal o judicial.

## **2.4. La tenencia de Drogas. El Marco Legal**

En agosto de 2007, el presidente Rafael Correa decreta el estado de emergencia para el sistema de rehabilitación social debido a la saturación de detenidos en las cárceles del país. Como indica el siguiente gráfico, la población carcelaria se duplica en menos de dos décadas, a una tasa de saturación (la razón numérica de prisioneros

respecto a la capacidad total de personas del precinto carcelario) del 157%. (Edwards, 2010).



Sources: Pontón y Torres (2007), data for 1989-2006. National Direction of Social Rehabilitation, data for 2007

**GRÁFICO 1. (EDWARDS, 2010) “ECUADOR’S DRUG LEGISLATION AND THE IMPACT ON ITS PRISON POPULATION” (LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA SOBRE DROGAS Y SU IMPACTO EN LA POBLACIÓN CARCELARIA)**

Una de las causantes de esta saturación es la conocida Ley 108 (Ley de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas) cuyo carácter punitivo fue eliminado por la disposición derogatoria séptima del COIP (Boletín Informativo Observando, 2014)<sup>70</sup>. Uno de los problemas que la ley 108 presentaba es la criminalización del uso de drogas, ubicando tanto el uso como la dependencia en la misma categoría que la producción y el tráfico (Edwards, 2010)<sup>71</sup>. Esta situación permitía que cualquier persona en posesión de sustancias ilícitas sea detenida y sujeta a penas que más tarde fueron calificadas como desproporcionales. Pues para la Ley 108, en su forma original, cualquier cargo relacionado a drogas, sin importar la cantidad involucrada o las circunstancias del

<sup>70</sup> <http://www.prevenciondrogas.gob.ec/wp-content/uploads/2015/08/Boletin-N.-7.pdf>

<sup>71</sup> [http://druglawreform.info/images/stories/documents/Systems\\_Overload/TNI-Systems\\_Overload-ecuador-def.pdf](http://druglawreform.info/images/stories/documents/Systems_Overload/TNI-Systems_Overload-ecuador-def.pdf)

arresto eran considerados crímenes de reclusión a un nivel punitivo similar al asesinato en primer grado (Edwards, 2010)<sup>72</sup>.

Por ejemplo, la Ley 108 define categóricamente la ofensa de tenencia de drogas:

*“Art. 40. Tenencia de sustancias sujetas a fiscalización.- Nadie podrá, sin autorización legal o previo despacho de receta médica, mantener en su persona, ropas, valijas, vivienda, lugar de trabajo u otro sitio cualquier cantidad de las sustancias sujetas a fiscalización, ni tenerlas, en cualquier forma, para el tráfico ilícito de ellas.”* (Congreso Nacional Registro Oficial N°523)<sup>73</sup>

*“Art. 64.- Sanciones para la tenencia y posesión ilícitas.- Quienes sin autorización legal o despacho de receta médica previa, posean o tengan, con su consentimiento expreso o tácito, deducible de una o más circunstancias, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, en sus personas, ropas, valijas, muebles, en su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro sitio del que sean propietarios, arrendatarios, tenedores u ocupantes a cualquier título, o que esté bajo su dependencia o control, serán sancionados con la pena de doce a diez y seis años de reclusión mayor extraordinaria y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales generales.”* (Congreso Nacional Registro Oficial N°523)<sup>74</sup>

Así al revisar el carácter de la anterior Ley 108 no es extraño que se haya exagerado el uso de prisión preventiva, saturando las cárceles del país.

En febrero de 2014, se aprueba el actual Código Orgánico Integral Penal (COIP), en donde se buscó principalmente lograr cambios en las desproporcionadas penas establecidas por la Ley 108, pues como establece la Constitución del Ecuador “las

---

<sup>72</sup> [http://druglawreform.info/images/stories/documents/Systems\\_Overload/TNI-Systems\\_Overload-ecuador-def.pdf](http://druglawreform.info/images/stories/documents/Systems_Overload/TNI-Systems_Overload-ecuador-def.pdf)

<sup>73</sup> [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifmvz1ObMAhUEKx4KHSXvCxwQFggpMAI&url=http%3A%2F%2Fbicad.oas.org%2Fflavado\\_activos%2Fesp%2Fleyeslavado%2FEcuador%2Fley108ec.doc&usg=AFQjCNFEvDqLf439s7NT2brPEgtrLEgc2A](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifmvz1ObMAhUEKx4KHSXvCxwQFggpMAI&url=http%3A%2F%2Fbicad.oas.org%2Fflavado_activos%2Fesp%2Fleyeslavado%2FEcuador%2Fley108ec.doc&usg=AFQjCNFEvDqLf439s7NT2brPEgtrLEgc2A)

<sup>74</sup> [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifmvz1ObMAhUEKx4KHSXvCxwQFggpMAI&url=http%3A%2F%2Fbicad.oas.org%2Fflavado\\_activos%2Fesp%2Fleyeslavado%2FEcuador%2Fley108ec.doc&usg=AFQjCNFEvDqLf439s7NT2brPEgtrLEgc2A](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifmvz1ObMAhUEKx4KHSXvCxwQFggpMAI&url=http%3A%2F%2Fbicad.oas.org%2Fflavado_activos%2Fesp%2Fleyeslavado%2FEcuador%2Fley108ec.doc&usg=AFQjCNFEvDqLf439s7NT2brPEgtrLEgc2A)

*adicciones son un problema de salud pública”* (Velasco, 2014)<sup>75</sup>. Como indica Paladines en el Boletín Informativo Observando, en el artículo “*La racionalización de la legislación de drogas y la aplicación del principio de favorabilidad*”, el artículo 220 del COIP establece una serie de hitos respecto a la carga procesal y tasa de encarcelamiento, que se destaca a continuación:

Niveles de participación criminal en función de la cantidad y tipo de sustancia ilegal, según los cuales se establecen penas proporcionales. Distinguiéndose ahora entre: grandes, altos, medianos y pequeños traficantes de drogas.

Distinción entre traficantes y cultivadores para diferenciar entre campesinos y mafias de producción. También es una distinción entre autores o líderes respecto a instrumentos o partícipes de la actividad criminal.

Distinción entre delitos relacionados con drogas y aquellos que involucran violencia, homicidio o violación.

Distinción entre consumidores y pequeños traficantes mediante la tabla de cantidades máximas.

En la siguiente tabla se puede observar los delitos tipificados por el COIP y sus penas:

---

<sup>75</sup> [http://www.wola.org/sites/default/files/Drug%20Policy/Informe\\_debate%20de%20drogas\\_\\_FINAL\\_%20PARA%20PUBLICAR.pdf](http://www.wola.org/sites/default/files/Drug%20Policy/Informe_debate%20de%20drogas__FINAL_%20PARA%20PUBLICAR.pdf)

Delitos por la producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización (*)	Pena (**)
Art. 219 Producción ilícita de sustancias sujetas a fiscalización	
1. Sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan	7 a 10 años
2. Precursores y químicos específicos	3 a 5 años
Art.220 Tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización:	
1. Sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en las cantidades señaladas en las siguientes escalas	
a) Mínima escala	2 a 6 meses
b) Mediana escala	1 a 3 años
c) Alta escala	5 a 7 años
d) Gran escala	10 a 13 años
2. Precursores químicos o sustancias químicas específicas	5 a 7 años
El uso de niños en este delito constituye un agravante	7 años + 1/3 de la pena
La tenencia de drogas para uso o consumo personal en las cantidades establecidas en la normativa no será punible	
Art. 221 Organización y financiamiento para la producción de sustancias sujetas a comercialización	16 a 19 años
Art. 222 Siembra o cultivo	1 a 3 años
Artículo 223.- Suministro de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan	1 a 3 años
Artículo 224.- Prescripción injustificada	1 a 3 años
Artículo 225.- Acciones de mala fe para involucrar en delitos de drogas	5 a 7 años

\* COIP, Capítulo Tercero, Delitos contra los Derechos del Buen Vivir, Sección Segunda.

\*\* Dentro del COIP las penas son acumulables hasta un máximo de 40 años.

TABLA 1. (VELASCO, 2014)<sup>76</sup>

En la misma línea de racionalización de penas, el artículo 220 del COIP se ampara en la tabla encargada al CONSEP para la categorización del Tráfico ilícito de Drogas, que a continuación se muestra. Así como también, se reconoce de manera legal en el artículo 228, la tenencia para consumo.

<sup>76</sup> [http://www.wola.org/sites/default/files/Drug%20Policy/Informe\\_debate%20de%20drogas\\_\\_FINAL\\_%20PARA%20PUBLICAR.pdf](http://www.wola.org/sites/default/files/Drug%20Policy/Informe_debate%20de%20drogas__FINAL_%20PARA%20PUBLICAR.pdf)

<b>Categorización para el Tráfico Ilícito de Drogas Art. 220 COIP</b>							
<b>Tipo de tráfico y pena</b>	<b>Heroína</b>	<b>Pasta base de cocaína</b>	<b>Cocaína</b>	<b>Marihuana</b>	<b>Anfetaminas</b>	<b>MDA</b>	<b>Éxtasis</b>
Minima Escala: 2-6 meses	0-1 gramos	0-50 gramos	0-50 gramos	0-300 gramos	0-2,5 gramos	0-2,5 gramos	0-2,5 gramos
Mediana Escala: 1-3 años	1-5 gramos	50-500 gramos	50-2.000 gramos	300-2.000 gramos	2,5-5,0 gramos	2,5-5,0 gramos	2,5-5,0 gramos
Alta Escala: 5-7 años	5-20 gramos	500-2.000 gramos	2.000-5.000 gramos	2.000-10.000 gramos	5,0-12,5 gramos	5,0-12,5 gramos	5,0-12,5 gramos
Gran Escala: 10-13 años	Más de 20 gramos	Más de 2.000 gramos	Más de 5.000 gramos	Más de 10.000 gramos	Más de 12,5 gramos	Más de 12,5 gramos	Más de 12,5 gramos

**Fuente: Resolución 002 CONSEP-CD-2014**

**Elaboración: Coordinación Misional de la Defensoría Pública del Ecuador**

GRÁFICO 2. CATEGORIZACIÓN DE TRÁFICO DE DROGAS ECUADOR. (BOLETÍN INFORMATIVO OBSERVANDO, 2014)<sup>77</sup>

En la tabla se aprecia de manera sencilla la categorización de la pena en función de la calidad y la cantidad del tipo de sustancia ilícito.

## 2.5. La tenencia de Drogas. Criminalización del Consumo

Como se pudo observar en la anterior sección, el COIP en sus artículos 219 a 228 establece un marco de referencia nuevo, modificando tanto la construcción de los tipos de penas así como la predeterminación de las mismas (Boletín Informativo Observando, 2014). Si bien, con este nuevo marco se evita que una mula tenga la misma pena que un narcotraficante, llama la atención que el número de detenidos por tenencia de drogas es aún elevado, tomando en cuenta que el código considera al consumo como una excepción. Así por ejemplo, en nuestro país para 2014, existe un total de 5103 personas con sentencia condenatoria por delito de posesión (Colectivo de Estudios Drogas y Derecho CEDD, 2015)<sup>78</sup>.

<sup>77</sup> <http://www.prevenciondrogas.gob.ec/wp-content/uploads/2015/08/Boletin-N.-7.pdf>

<sup>78</sup> [http://www.drogasyderecho.org/publicaciones/pub-priv/Catalina\\_v09.pdf](http://www.drogasyderecho.org/publicaciones/pub-priv/Catalina_v09.pdf)

Esto implica que no necesariamente la regulación punitiva de la tenencia de drogas a través de tablas de cantidades máximas evite la criminalización del consumo. Por cuanto, para consumir es necesario primero poseer. Situación que coloca a los consumidores en frente de organismos de tipo punitivo (la policía, la fiscalía, etc.), aunque sea para determinar que la cantidad poseída era para su consumo.

En consecuencia, la tipificación de la posesión simple como delito implica la violación del principio de inocencia. Por cuanto al establecer los montos máximos para consumo, permite que se presuma una cierta peligrosidad en la conducta de tenencia de drogas. De aquí que sea necesario que no se castigue la simple posesión de la sustancia sino que se logre establecer una relación y una clara disposición de la persona poseedora de la sustancia para el comercio, suministro y venta ilícita.

Por ejemplo, en las distintas normativas de varios países latinoamericanos, entre ellos el Ecuador, existe pena debido a la posesión/tenencia de drogas. Un caso de excepción es el de Costa Rica en donde, dicha pena no existe. En el siguiente cuadro tomado del artículo “*La regulación de la posesión y criminalización de los consumidores de drogas en América Latina*” del CEDD<sup>79</sup> se observan los artículos regulatorios de la posesión de drogas en diversos países latinoamericanos.

---

<sup>79</sup> Jorge Vicente Paladines, *La (des)proporcionalidad de la ley y la justicia antidrogas en Ecuador*, Cuadernos Defensoriales 1, Colectivo de Estudios Drogas y Derecho, Defensoría Pública del Ecuador, Quito, 2012.

País	Consumo	Posesión	Regulación (síntesis)
Argentina	No	Sí	La posesión o tenencia simple y la tenencia con fines están tipificadas como delito. El artículo 14 de la Ley 23.737 tipifica la posesión para consumo como delito. Sin embargo, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 14 siempre que "se realice en condiciones tales que no traigan aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros". (Véase Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, Fallo Arriola -A. 891. XLIV-).
Bolivia	No	Sí	La posesión para consumo es delito de acuerdo con el artículo 49 de la Ley 1008, sancionable con tratamiento forzoso. Sin embargo, en la práctica esta disposición no se aplica. En caso de que un examen médico determine que la persona porta más de lo necesario para su consumo, dentro de 48 horas es procesada por tráfico.
Brasil <sup>2</sup>	No	Sí	La posesión para consumo y la posesión simple están tipificadas como delito. El artículo 28 de la Ley 11.343/06, señala que el juez determina cuándo la sustancia se considera para consumo personal tomando en cuenta, entre otras cosas, la "naturaleza" de la sustancia, la cantidad y los antecedentes de la persona. Las sanciones para posesión por consumo no incluyen penas privativas de la libertad.
Colombia	No	Sí	El consumo está prohibido constitucionalmente, pero la Corte Suprema de Justicia ha sostenido, con base en la doctrina de la dosis de aprovisionamiento, que el porte para consumo no está penalizado incluso si sobrepasa la dosis personal. <sup>3</sup> Sin embargo, la posesión simple sí está tipificada como delito. <sup>4</sup>

País	Consumo	Posesión	Regulación (síntesis)
Costa Rica	No	No	Ni la posesión para consumo, ni la posesión simple son delito. El delito de posesión sólo es delito si se determina que la intención de la persona es para que "distribuya, comercie, suministre, fabrique, elabore, refine, transforme, extraiga, prepare, cultive, produzca, transporte, almacene o venda las drogas, las sustancias o los productos referidos en esta Ley, o cultive las plantas de las que se obtienen tales sustancias o productos" (Artículo 58 de la Ley 8204). La posesión está tipificada y sancionada tratándose de semillas "con capacidad germinadora u otros productos naturales para producir las referidas drogas." (Ley 8204 en el Artículo 58, aunque en la práctica esta ley no se aplica).
Ecuador	No	Sí	La posesión simple y para uso están tipificadas como delito, pero cuando la posesión es para consumo, no es sancionada (Art. 220 del Código Orgánico Integral Penal). La posesión simple se materializa por encima de los umbrales. <sup>5</sup>
México	No	Sí	La posesión para consumo personal es un delito, pero no se procede penalmente, siempre que no se exceda de los umbrales máximos establecidos por la Ley General de Salud (Art. 479), no sea en lugares como escuelas o cárceles y se trate de alguna de las sustancias contempladas en la LGS. La posesión simple es delito. <sup>6</sup>
Perú	No	Sí	La posesión para consumo no es punible siempre que no exceda los umbrales de cantidad permitidos o se encuentre en posesión de dos o más tipos de sustancias. Por encima de los umbrales, es punible.
Uruguay	No	Sí	La posesión para consumo no es delito. El juez, de acuerdo a las "reglas de la sana crítica" decide cuándo una sustancia será destinada a consumo personal. En el caso de la cannabis, se entiende para consumo hasta 40 gramos de marihuana o 6 plantas (Artículo 7, Ley 19.172). La posesión simple es delito, salvo que se cuenta con autorización legal de artículo 5 de la Ley 19.172.

TABLA 2. REGULACIÓN DE LA POSESIÓN SIMPLE DE DROGA. FUENTE: CEDD.

Desde la perspectiva de la Policía Nacional, en el informe de la situación del “microtráfico” del año 2015, se dispone de un total de 8369 detenidos en los operativos antinarcóticos. En el mismo informe se encuentra una tabla comparativa de la cantidad de casos y detenidos entre los años 2014 y 2015 analizadas en el período de enero a



noviembre. En general se puede observar un incremento en la cantidad de detenidos. Por ejemplo, para Pichincha el número de casos se incrementa de 7 a 36 y el de detenidos de 12 a 53 entre los años 2014 y 2015 respectivamente. Esta tendencia se mantiene en general a través de las diferentes provincias.

A primera vista, los resultados arrojados por las operaciones anti narcóticos de la Policía Nacional, determinarían que existe un ambiente de control respecto al narcotráfico. Sin embargo, aquí subyace la duda, en cuanto a que si bien se ha aumentado el número de detenidos, el narcotráfico en sí no se ve mermado, por cuanto no son los líderes narcotraficantes quienes han sido recluidos. Muchos de los detenidos pueden estar en una situación más bien vulnerable, en la que algunos serán consumidores esperando a verificar su situación como tal y otros serán personas sub-empleadas o desempleadas que buscaron un rédito económico en un tráfico en escala baja. Estas dos situaciones deben ser revisadas desde políticas de seguridad social y médica en el país.

ZONAS Y SUBZONAS	CASOS	DETENIDOS	DROGAS	CASOS		DETENIDOS		DROGAS	
	% PORCENTUAL	% PORCENTUAL	% PORCENTUAL	01 ENE - 12 NOV 2014	01 ENE - 12 NOV 2015	01 ENE - 12 NOV 2014	01 ENE - 12 NOV 2015	01 ENE - 12 NOV 2014	01 ENE - 12 NOV 2015
AZUAY	47,06	-2,14	414,83	85	125	140	137	10.800,20	55.602,96
BOLIVAR	400,00	69,23	178,53	4	20	13	22	127,60	355,40
CAÑAR	47,22	68,29	112,21	36	53	41	69	7.358,04	15.614,50
CARCHI	38,46	14,84	115,52	91	126	128	147	366.049,60	788.894,70
CHIMBORAZO	30,19	102,78	393,76	53	69	36	73	2.374,50	11.724,40
COTOPAXI	124,32	107,14	1.468,22	37	83	42	87	2.413,60	37.850,60
D.M. GUAYAQUIL	46,37	87,61	67,88	427	625	452	848	1.308.350,57	2.196.489,98
D.M. QUITO	140,09	124,10	242,37	227	545	307	688	539.515,11	1.847.147,37
EL ORO	49,29	52,59	454,36	140	209	135	206	30.318,48	168.073,67
ESMERALDAS	39,84	47,29	108,36	123	172	129	190	2.237.607,20	4.662.353,00
FCO. DE ORELLANA	30,56	29,82	457,61	36	47	57	74	3.182,40	17.745,30
GALAPAGOS	125,00	157,14	86,94	12	27	14	36	1.274,50	2.382,50
GUAYAS	285,71	235,09	2.449,09	42	162	57	191	24.520,66	625.054,72
IMBABURA	92,55	87,50	141,82	94	181	128	240	149.828,05	362.317,50
LOJA	46,97	42,86	-18,23	66	97	91	130	53.377,30	43.645,00
LOS RIOS	36,90	52,33	31,73	187	256	193	294	225.097,14	296.522,50
MANABI	48,66	22,95	116,22	187	278	244	300	97.728,14	211.306,36
M. SANTIAGO	29,41	39,39	-43,07	34	44	33	46	4.621,95	2.631,06
NAPO	19,15	12,24	86,33	47	56	49	55	36.051,70	67.176,50
PASTAZA	52,00	50,00	392,26	25	38	30	45	1.637,20	8.059,30
PICHINCHA	414,29	341,67	2.629,46	7	36	12	53	7.007,21	191.258,65
SANTA ELENA	33,33	24,71	-78,91	63	84	85	106	33.959,42	7.161,00
STO. DGO. DE LOS RIOS	25,84	26,55	37,00	178	224	226	286	651.871,30	893.077,05
SUCUMBIOS	0,00	-38,10	8,78	57	57	84	52	192.264,50	209.150,30
TUNGURAHUA	27,27	79,12	85,14	99	126	91	163	18.323,00	33.922,57
ZAMORA CHINCHIPE	46,67	-28,00	-77,63	15	22	25	18	8.488,52	1.898,70
<b>TOTAL</b>	<b>58,60</b>	<b>60,31</b>	<b>112,12</b>	<b>2.372</b>	<b>3.762</b>	<b>2.842</b>	<b>4.556</b>	<b>6.014.148</b>	<b>12.757.416</b>

TABLA 3. CASOS DETENIDOS Y DROGAS. SITUACION DEL TRAFICO (ESCALA BAJA) 2015. FUENTE POLICÍA NACIONAL

Del presente análisis se concluye que la tipificación de la posesión de drogas como delito, inclusive en las legislaciones que observan umbrales de tolerancia a la misma, conlleva a la criminalización del consumidor. A decir de la CEDD, lo ubica en una situación de vulneración “*frente a instituciones de cuestionada reputación*”<sup>80</sup>.

Como alternativas a la situación a fin de evitar la criminalización de sujetos consumidores en la tenencia de drogas se tendrían las siguientes recomendaciones:

Se debe buscar acreditar que la posesión de drogas está relacionada a la venta y distribución ilícita del alcaloide. Es decir la conducta delictiva debe ser acreditada y no sólo presumida.

Los umbrales han de ser revisados en función de las prácticas de consumo propias de cada país.

Tratar de ubicar a las personas consumidoras ante lineamientos claros de salud pública que permita mejorar su calidad de vida.

Atender a las garantías de cada ciudadano y observarlas al momento de detención. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, que no sanciona la tenencia de drogas, cuando se encuentra a alguien en consumo público de la sustancia, la misma es requisada, sin ser detenida la persona.

---

<sup>80</sup> Véase de “La regulación de la posesión y criminalización de los consumidores de drogas en América Latina”, pág. 8

### **CAPÍTULO III. El valor del parte policial en la práctica de juicios de Tenencia de Drogas**

El entredicho más significativo en los juicios de tenencia de drogas es la propia posesión. Si bien el Código Orgánico Integral Penal a través de las modificaciones introducidas en el artículo 220 pone límites máximos para la posesión de dichas sustancias, no se resuelven dos hechos a mi parecer:

La mayoría de aprendidos corresponden a la escala mínima. Por lo que sigue siendo difícil atacar a los grandes traficantes. Esta estadística se la puede observar en el siguiente cuadro tomado de la Secretaría Técnica de Drogas para el año 2015 (ver Gráfico N° 1 Personas PROCESADAS artículo 220. Fuente: <http://186.46.218.227/consep/public/>).

Derivado de lo anterior, el problema de consumidores es atacado de manera punitiva y no como un problema de salud pública.

Por ejemplo, en la siguiente gráfica, se ilustra la cantidad de imputados de acuerdo al artículo 220 y las tablas de máximas cantidades en el año 2015. La mayor cantidad de casos están relacionados a mínima escala.

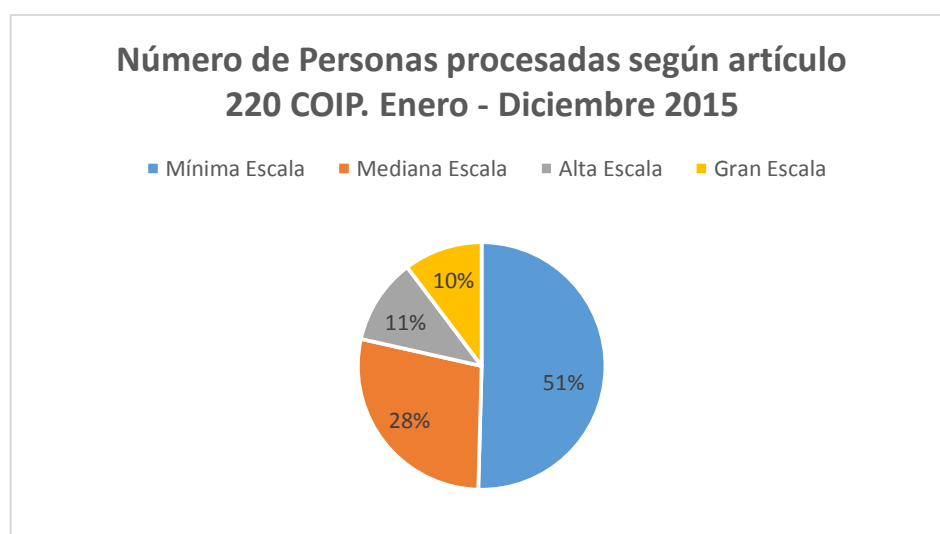


GRÁFICO N° 1 PERSONAS PROCESADAS ARTÍCULO 220. FUENTE: [HTTP://186.46.218.227/CONSEP/PUBLIC/](http://186.46.218.227/CONSEP/PUBLIC/).

En el gráfico 1 se observa que del universo estadístico registrado en el CONSEP desde enero 2015 a diciembre 2015, el 51% corresponde a mínima escala. Esto ratifica que lo que se castiga es la tenencia y que para determinar si el imputado está involucrado en narcotráfico, dicha persona se pone frente a un tribunal. Por alta y gran escala, el porcentaje de casos es apenas de 11% y 10% respectivamente.

A continuación se realiza el análisis de varias sentencias relacionadas a tenencia de drogas. En éstas se podrá notar el papel que determina en el juicio el parte policial y se podrá entrever que las pruebas aportadas generalmente no rebasan el ámbito del testimonio de los policías involucrados en la aprehensión. También se revisa las garantías que habrían sido vulneradas en el proceso.

### **Resumen de casos relativos a la tenencia de Drogas**

<b>CASO No. 1</b>	
<b>No. Juicio</b>	17282-2015-0117. Unidad de Flagrancia
<b>Elementos Relevantes utilizados por el Juzgador</b>	<p>Por versiones de moradores se denuncia la presencia de un individuo que se encuentra expendiendo sustancias ilícitas.</p> <p>Al realizar el patrullaje se encuentra al individuo cuyas características fueron expuestas por los moradores al agente policial. Se procede a solicitar documentos personales, los mismos que el ciudadano no poseía.</p> <p>Al realizar la inspección personal se encuentra a la altura de la cintura 36 sobres papel revista con una sustancia color crema (presumiblemente droga) y 2 fundas plásticas transparentes con una</p>

	<p>sustancia similar.</p> <p>Se aplicó los reactivos químicos TANRED y SCOUT que verificaron como prueba preliminar que el contenido era Cocaína.</p>
<b>Aspecto</b> <b>Jurídico</b> <b>Considerado</b>	Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tipificado y sancionado en el Art. 220. 1 a) del COIP
<b>Procedimiento</b>	Abreviado: Aceptación de hecho fáctico. Enunciación de elementos recabados por fiscalía.
<b>Partes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sujeto Activo. A.</b> Ecuatoriano de 32 años, albañil, de género masculino.</li> <li>• <b>Sujeto Pasivo. B.</b> Sociedad en General</li> </ul>
<b>Problema</b> <b>Jurídico</b>	Ejemplo: ¿Es jurídicamente viable que A haya lesionado el bien jurídico protegido (salud pública) de toda una sociedad?
<b>Tesis</b>	El juzgador considera que se han realizado actos idóneos y conducentes de modo inequívoco, poniendo en riesgo el bien jurídico de la salud pública y en audiencia de procedimiento abreviado el procesado admite su participación en el hecho.
<b>Sanción</b> <b>Impuesta</b>	<p>Privación de libertad por 20 días</p> <p>Multa de dos salarios básicos unificados (\$708)</p>

**TABLA 4. RESUMEN DE CASO DE TENENCIA 1**

<b>CASO No. 2</b>	
<b>No. Juicio</b>	17282-2015-02455. Unidad de Flagrancia
<b>Elementos</b>	Por investigación de inteligencia se procede al allanamiento del

<b>Relevantes utilizados por el Juzgador</b>	domicilio de la procesada.  Se encuentra 61 fundas de cocaína con un peso de 9.7 gramos.
<b>Aspecto Jurídico Considerado</b>	Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tipificado y sancionado en el Art. 220. 1 a) del COIP
<b>Procedimiento</b>	Abreviado: Aceptación de hecho fáctico. Enunciación de elementos recabados por fiscalía.
<b>Partes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sujeto Activo. A.</b> Ecuatoriana mayor de edad.</li> <li>• <b>Sujeto Pasivo. B.</b> Sociedad en General</li> </ul>
<b>Problema Jurídico</b>	Ejemplo: ¿Es jurídicamente viable que A haya lesionado el bien jurídico protegido (salud pública) de toda una sociedad?
<b>Tesis</b>	El juzgador considera que se han realizado actos idóneos y conducentes de modo inequívoco, poniendo en riesgo el bien jurídico de la salud pública y en audiencia de procedimiento abreviado el procesado admite su participación en el hecho.
<b>Sanción Impuesta</b>	Privación de libertad por 20 días  Multa de dos salarios básicos unificados (\$708)

**TABLA 5. RESUMEN DE CASO DE TENENCIA 2**

<b>CASO No. 3</b>	
<b>No. Juicio</b>	17282-2015-03695. Unidad de Flagrancia
<b>Elementos Relevantes</b>	4 ciudadanos realizan expendio de sustancias a través de menores de edad, lo cual queda verificado en los vídeos de las cámaras del

<b>utilizados por el Juzgador</b>	<p>sistema ECU911</p> <p>Se encuentra dinero fragmentado, 5.60 gramos de cocaína base y 3.2 gramos de marihuana al momento de la aprehensión.</p> <p>Avalúo de evidencias.</p> <p>Parte Policial</p> <p>Informe Químico</p> <p>Vídeo de Ecu 911</p>
<b>Aspecto Jurídico Considerado</b>	Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tipificado y sancionado en el Art. 220. 1 a) del COIP
<b>Procedimiento</b>	Abreviado: Aceptación de hecho fáctico. Enunciación de elementos recabados por fiscalía.
<b>Partes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sujeto Activo. A.</b> Ecuatorianos mayores de Edad.</li> <li>• <b>Sujeto Pasivo. B.</b> Sociedad en General</li> </ul>
<b>Problema Jurídico</b>	Ejemplo: ¿Es jurídicamente viable que A haya lesionado el bien jurídico protegido (salud pública) de toda una sociedad?
<b>Tesis</b>	El juzgador considera que se han realizado actos idóneos y conducentes de modo inequívoco, poniendo en riesgo el bien jurídico de la salud pública y en audiencia de procedimiento abreviado el procesado admite su participación en el hecho.
<b>Sanción Impuesta</b>	<p>Privación de libertad por 20 días para cada uno</p> <p>Multa de dos salarios básicos unificados (\$708) por cada infractor</p>

**TABLA 6. RESUMEN DE CASO DE TENENCIA 3**



<b>CASO No. 4</b>	
<b>No. Juicio</b>	17282-2015-05918. Unidad de Flagrancia
<b>Elementos Relevantes utilizados por el Juzgador</b>	<p>Se observa al ciudadano en actitud de tranza por medio de saludo.</p> <p>Se registra en la mano derecha del ciudadano una funda plástica que contiene una sustancia verdosa, presumiblemente marihuana.</p> <p>Al realizar el pesaje y análisis químico se determina que la sustancia en cuestión es marihuana con un peso de 19.83 gramos.</p> <p>Se procedió a la prisión preventiva</p> <p>Se realizó examen sicosomático, concluyendo que el ciudadano es una persona farmacodependiente.</p>
<b>Aspecto Jurídico Considerado</b>	Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tipificado y sancionado en el Art. 220. 1 a) del COIP
<b>Procedimiento</b>	Abreviado: Aceptación de hecho fáctico. Enunciación de elementos recabados por fiscalía.
<b>Partes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sujeto Activo. A.</b> Ecuatoriano, 18 años, comerciante</li> <li>• <b>Sujeto Pasivo. B.</b> Sociedad en General</li> </ul>
<b>Problema Jurídico</b>	Ejemplo: ¿Es jurídicamente viable que A haya lesionado el bien jurídico protegido (salud pública) de toda una sociedad?
<b>Tesis</b>	El juzgador considera que se han realizado actos idóneos y conducentes de modo inequívoco, poniendo en riesgo el bien jurídico de la salud pública y en audiencia de procedimiento abreviado el procesado admite su participación en el hecho.

<b>Sanción</b>	Privación de libertad por 4 meses
<b>Impuesta</b>	Multa de tres salarios básicos unificados (\$1.098)

**TABLA 7. RESUMEN DE CASO DE TENENCIA 4**

<b>CASO No. 5</b>	
<b>No. Juicio</b>	17282-2015-05379. Unidad de Flagrancia
<b>Elementos Relevantes utilizados por el Juzgador</b>	<p>La ciudadana es observada desde varios puntos estratégicos realizando la venta de sustancias ilícitas, mediante intercambio de manos, recibiendo dinero a cambio de fundas con la sustancia.</p> <p>Se encuentra en posesión de la señora una cartera de tela de varios colores de la que se extrajo fundas pequeñas que contenían una sustancia vegetal que dio positivo para marihuana.</p> <p>De sus partes íntimas se extrae una funda pequeña que contenía fundas plásticas traslúcidas con una sustancia blanquecina, presumiblemente cocaína.</p> <p>Parte Policial</p> <p>Testimonio de agentes aprehensores.</p> <p>Informe de verificación y pesaje con un total de 199.98 gramos de marihuana y 1.26 gramos de cocaína.</p>
<b>Aspecto Jurídico Considerado</b>	Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tipificado y sancionado en el Art. 220. 1 a) y Art. 220. 1 b) del COIP
<b>Procedimiento</b>	Abreviado: Aceptación de hecho fáctico. Enunciación de elementos recabados por fiscalía.

<b>Partes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sujeto Activo. A.</b> Ecuatoriana 28 años de edad, comerciante.</li> <li>• <b>Sujeto Pasivo. B.</b> Sociedad en General</li> </ul>
<b>Problema Jurídico</b>	Ejemplo: ¿Es jurídicamente viable que A haya lesionado el bien jurídico protegido (salud pública) de toda una sociedad?
<b>Tesis</b>	El juzgador considera que se han realizado actos idóneos y conducentes de modo inequívoco, poniendo en riesgo el bien jurídico de la salud pública y en audiencia de procedimiento abreviado el procesado admite su participación en el hecho.
<b>Sanción Impuesta</b>	Privación de libertad por 1 año 4 meses  Multa de catorce salarios básicos unificados

**TABLA 8. RESUMEN DE CASO DE TENENCIA 5**

<b>CASO No. 6</b>	
<b>No. Juicio</b>	17241-2002-0123. Tribunal Primero de Garantías Penales
<b>Elementos Relevantes utilizados por el Juzgador</b>	El 8 de diciembre de 1999 se detiene a una persona por tenencia de 36 gramos de marihuana (8 tamugas) en las partes íntimas.
<b>Aspecto Jurídico Considerado</b>	Artículo 62, inciso segundo de la Ley 108
<b>Procedimiento</b>	Código de Procedimiento Penal. Normativa legal vigente al momento de la infracción.

<b>Partes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sujeto Activo. A.</b> Ecuatoriano de 34 años, reciclador e instrucción primaria.</li> <li>• <b>Sujeto Pasivo. B.</b> Sociedad en General</li> </ul>
<b>Problema Jurídico</b>	Ejemplo: ¿Es jurídicamente viable que A haya lesionado el bien jurídico protegido (salud pública) de toda una sociedad?
<b>Tesis</b>	El juzgador realiza un análisis que los consumidores de sustancias sicotrópicas son considerados como adictos y por tanto necesitados de atención de salud pública. Independientemente de ratificarse que el ciudadano es un consumidor, se extingue la acción penal.
<b>Sanción Impuesta</b>	Extinción de la acción penal el 30 de septiembre de 2015

**TABLA 9. RESUMEN DE CASO DE TENENCIA 6**

<b>CASO No. 7</b>	
<b>No. Juicio</b>	17282-2015-01005. Unidad de Flagrancia
<b>Elementos Relevantes utilizados por el Juzgador</b>	<p>El 10 de marzo de 2015, el procesado es aprehendido por miembros de la policía por posible venta de drogas debido a actitud sospechosa determina en cruces de manos con otros transeúntes.</p> <p>El informe pericial químico determinó que la sustancia en posesión del sujeto era pasta base de cocaína en una cantidad de 8.26 gramos.</p>
<b>Aspecto Jurídico Considerado</b>	Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tipificado y sancionado en el Art. 220. 1 a) del COIP
<b>Procedimiento</b>	Directo

<b>Partes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sujeto Activo. A.</b> Ecuatoriano de 28 años, comerciante, instrucción secundaria.</li> <li>• <b>Sujeto Pasivo. B.</b> Sociedad en General</li> </ul>
<b>Problema Jurídico</b>	Ejemplo: ¿Es jurídicamente viable que A haya lesionado el bien jurídico protegido (salud pública) de toda una sociedad?
<b>Tesis</b>	El juzgador considera que se han realizado actos idóneos y conducentes de modo inequívoco, poniendo en riesgo el bien jurídico de la salud pública y en audiencia de procedimiento directo en la que se recepta fundamentalmente los testimonios de los policías que aprendieron a la persona por cruce de manos. <b>El acusado no se encuentra presente en la audiencia de juzgamiento.</b>
<b>Sanción Impuesta</b>	Privación de la libertad por 2 meses Multa de 2 salarios básicos unificados La Juzgadora establece en la parte resolutive de la sentencia: <i>“Ejecutoriada que sea esta sentencia ofíciase al señor Jefe de la Policía Judicial a fin de que proceda a la localización, captura y remisión del sentenciado al Centro de Detención de Varones de Quito”</i>

**TABLA 10. RESUMEN DE CASO DE TENENCIA 7**

## Análisis Crítico

En los casos antes expuestos se puede notar que la nueva figura que destaca en los juicios de tenencia de drogas es **el procedimiento abreviado**. Mecanismo al que distintos procesados han plegado en función de poder acceder a una pena de menor tiempo. Si bien, en una primera instancia, esto supondría un bienestar para el ciudadano aprehendido, debe tomarse en cuenta que también implica la aceptación tácita de lo expuesto en el parte policial, sin necesidad de escuchar los testimonios de los agentes aprehensores. Esta manifestación del procesado se la hace mediante declaración en la que el ratifica que sus derechos y garantías no han sido vulnerados. Desde el punto de vista procesal se hace caso omiso a los principios rectores del juicio como son: inmediación y contradicción, menos se podría entablar que se respeta el derecho de presunción de inocencia, en pro de facilitar la tramitación de una sentencia condenatoria y la conclusión de un caso, no existe una investigación que incluso puede determinar a los verdaderos traficantes que están detrás de la cadena de la comercialización ilícita de estupefacientes.

En todos los casos anteriores, el parte policial que lleva implícito lo expresado por un agente policial son elementos de convicción de Fiscalía. Inclusive, en el caso 4, no se tiene a consideración el hecho de que la persona encarcelada es un simple consumidor, ya que el procedimiento abreviado exige que la persona se declare como el sujeto activo de los daños mencionados, dando a entender que para dicha persona es más rápido aceptar el cometimiento del hecho que esperar una investigación que conlleva implícita una sanción.

Por su parte en el caso 5, se tiene un hecho insólito en el que una persona consumidora es puesta en prisión en el año 1999. Si bien para ese entonces, no se disponía de tablas valorativas de mínimas y máximas cantidades, la persona espera por

que se resuelva su situación jurídica por 16 años. En el año 2015 simplemente extinguen la acción penal en vez de restituir al reo su pérdida irreparable en tiempo, tomando en cuenta que en el análisis del juzgador determinan que la persona es un consumidor. No obstante, que este caso no tiene relación directa con el COIP actual, es importante en el sentido que establece dos puntos interesantes: a) la Falla del sistema al ejercer poder punitivo sobre la tenencia de drogas y b) los valores de las tablas de máximos pesos para consumos.

Finalmente, en el último caso 7 presentado, se puede observar el uso de fiscalía del testimonio de los policías aprehensores, que detuvieron al procesado al observar el cruce de manos que éste mantuvo con otros individuos, frase generalizada en los agentes antinarcóticos, fruto de lo cual se realiza el juzgamiento que concluye en una sentencia condenatoria, vulnerando el debido proceso cuando se sentencia en ausencia del acusado, hecho inconstitucional y que rompe derechos y garantías del ciudadano afectado.

En todos los casos aquí presentados, el verbo rector es la tenencia de drogas y considerando el último caso, podemos preguntar: ¿Bajo qué parámetro en realidad se puede estar seguro que la cantidad encontrada es la mínima para consumo? Tómese en cuenta que el problema de salud de adicción, no penado por la Constitución del país, es un problema que por su carácter dependiente exige el consumo de cantidades mayores por parte del afectado. Este particular indica que no hemos librado el evitar que una persona farmacodependiente enfrente al Estado como su acusador sino más bien, a decir de la Constitución, sea atendida en función de su problema de salud pública. Tal vez es necesario que en este tipo de delitos se empiece a trabajar de manera exigente con un sujeto pasivo tangible y medible, por cuanto en todos los casos el sujeto pasivo es de tipo abstracto y general (Sociedad General). Por otro lado de poder obtener sujetos

afectados por el expendio de drogas y tener de esta manera un sujeto pasivo concreto, se tiene el problema que dicha persona podría, en principio, ser no considerada por ciertos aspectos como afectada, por cuanto la decisión de consumir drogas es suya propia, por su voluntad y por su conocimiento.

En función de los casos antes expuestos, y mediante mecanismos como el procedimiento abreviado, puede notarse que no sólo se vulnera garantías a los aprehendidos en los delitos de tenencia de drogas, sino que el documento parte policial que debe ser meramente referencial en la práctica conlleva a una condena. Por lo tanto, las sentencias realizadas en función del mismo, son objetables, ya que en estos casos, al carecer de un sujeto ofendido concreto, se viene a depender en exceso de la narración de hechos y el testimonio honorable de quienes presenciaron el delito.



## CONCLUSIONES

Los delitos de tenencia de drogas provocan un conflicto entre el acusador y el procesado. Por cuanto, independientemente, de que la actual Constitución reconoce y avala la adicción como un problema de salud pública, la acción preventiva de la policía se desencadena por la “tenencia de drogas” y para consumir se debe “tener”. Esto ubica al consumidor frente a los aparatos punitivos del Estado desencadenando un proceso judicial en su contra.

En los juicios de tenencia de drogas no se puede hablar de un cumplimiento cabal del debido proceso. En los casos examinados se pueden observar dos tendencias reiterativas:

Utilización de los testimonios de los agentes antinarcóticos que realizan el parte policial indicando frases como: “*denuncias anónimas, cruce de manos, actitud sospechosa*”.

La mayoría de procesados, se acogen al procedimiento abreviado, que si bien es un medio legal no deja de vulnerar derechos y garantías de las personas, incluso al aceptar el hecho fáctico facilitan la burocracia empleada en ser procesados tratando de acceder a un tiempo menor en prisión.

En los casos analizados se evidencia que las personas involucradas no disponen de educación superior, algunos de ellos sólo tienen niveles primarios, en cuanto a su nivel económico, las actividades que desarrollan no son profesionales, sino más bien están orientados al trabajo informal. Esto indica que los sectores más vulnerables de la sociedad están expuestos a participar en las redes del tráfico de estupefacientes. Estadística que se comprueba porque la mayor cantidad de casos registrados son los que recaen en tenencia de sustancias sujetas a fiscalización de mínima escala.

Se debe tener presente que los miembros de la Policía Nacional, en general, y los miembros de la Unidad Antinarcóticos, no están facultados a establecer la existencia del delito de tenencia de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Su labor constitucional, legal y reglamentaria se reduce a informar de manera técnica la noticia críminis, para que el Fiscal (como órgano estatal facultado) investigue la existencia del delito y la posible responsabilidad penal.

Los hechos narrados e informados por la Policía Antinarcóticos están sujetos a la verificación fiscal. No son y no pueden ser verdades absolutas porque atentan contra los legítimos derechos humanos, constitucionales y legales de los sospechosos y/o procesados, como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa técnica de la causa.

Cada parte procesal juega un rol particular y excluyente en la Administración de Justicia. Así el Fiscal investiga, y de encontrar mérito acusa; el Defensor Público implementa de manera técnica y gratuita la defensa del caso; el Juez de Garantías Penales (sin ser parte procesal) es el encargado de velar, custodiar y tutelar el Debido Proceso. En ninguna parte de la Constitución de la República, ni del Código Orgánico Integral Penal y en general del Ordenamiento Jurídico Nacional, se establece que la Policía Antinarcóticos sea parte procesal. Lo que se dice con absoluta claridad es que la Policía Nacional colabora con la Administración de Justicia en la prevención y combate del crimen.

Concluyo que el Estado criminaliza la conducta de tenencia de drogas, por la intervención de Estados extranjeros que solventan la formación de unidades estatales especializadas en combatir el mal llamado crimen organizado. Así como la presión que genera la información mediática existente frente al tema. Sin embargo, la realidad es que se criminaliza la pobreza, la poca educación que consume a nuestra sociedad

carente de exigir verdaderas políticas estales, que no sean letra muerta plasmada en la Constitución.

## **RECOMENDACIONES**

Debido a las observaciones puntualizadas, se debería reformar el Código Orgánico Integral Penal, con la finalidad de que se establezca con absoluta claridad y precisión la función procesal del parte policial emitido por la Unidad Antinarcoóticos de tal suerte que él mismo NO sea arbitrariamente mal utilizado en el proceso penal. Asimismo, se debería normar, con extrema puntualidad el tratamiento procesal de la información vertida en el documento antes referido, para evitar posibles confusiones o malas interpretaciones.

Con la finalidad de reducir al máximo la anarquía valorativa de los medios de prueba, sería conveniente estructurar protocolos investigativos en los cuales se delimite qué medios de prueba, por la naturaleza del delito, son de radical importancia y necesarios al caso, economizando tiempo y dinero a la Administración de Justicia.

En lo que respecta a la sustanciación oral y adversarial del parte policial, sería conveniente que dentro del Código Orgánico Integral Penal se establezca que los testimonios vertidos por los miembros de la Policía Antinarcoóticos pertenecen al testimonio de terceros y que por lo mismo no poseen el valor de prueba plena.

En cuanto a lo que determina la Constitución de la República, que garantiza el derecho al Buen Vivir, al ser las adicciones un problema de salud pública, el Estado debe prevenir e intervenir con verdaderos equipos interdisciplinarios tanto de salud, social como judicial, y no dejar en retorica lo que la Carta Magna nos establece.

## **BIBLIOGRAFÍA:**

Arroyo Beltrán, Lenin, *Las Garantías Individuales y el Rol de Protección Constitucional*, Guayaquil, Arroyo Ediciones, 2008.

Ávila Santamaría, Ramiro, *La (In) Justicia Penal en la Democracia Constitucional de Derechos*, Quito, Ediciones Legales EDLE S.A., 2013.

Balcarce, Fabián Ignacio, *Dogmática Penal y Principios Constitucionales*, Buenos Aires, Editorial, Montevideo de Buenos Aires, 2014.

Beccaria, César Bonesana, *Tratado de los Delitos y de las Penas*, Bogotá, Editorial HELIASTA S.R.L., 1993.

Bentam, Jeremías, *La Prueba en el Juicio Oral Penal*, Quito, Editorial Cueva Carrión, 2004.

Bernal Valls, Jesús, *El Falso Testimonio*, Madrid, Editorial Tecnos, 1992.

Cueva Carrión, Luis, *La Prueba en el Juicio Oral Penal*, Quito, Ediciones Cueva Carrión, 2004.

Echandía, Hernando Devis, *Teoría General del Proceso*, Bogotá, Editorial Universitaria, 1997.

Echandía, Hernando Devis, *Teoría General de la Prueba Judicial*, Bogotá, Editorial Temis, 2006.

Faúndez Ledesma, Héctor, *El Derecho a un Juicio Justo*, Caracas, Editorial Universidad Central de Venezuela, 1992.

Ferrajoli, Luigi, *Derecho y Razón*, Madrid, Editorial Trotta, 1995.

Ferreya, Raúl Gustavo, *Notas sobre Derecho Constitucional y Garantías*, Buenos Aires, Editorial Ediar, 2003.

Florián, Eugenio, *De las Pruebas Penales*, Buenos Aires, Editorial Palma, 1998.

Fondo Justicia y Sociedad.- Fundación Esquel-USAID, *La Evolución del Sistema Procesal Penal en el Ecuador*, Quito, Editorial Esquel, 2004.

Foucault, Michael, *Vigilar y Castigar*, Madrid, Editores S.A., 1976.

Garrone, José A., *Diccionario Jurídico*, Buenos Aires, Editorial LexisNexis, 2005.

Gómez Orbaneja, Emilio, *La prueba Reconstituida*, Madrid, Editorial A.A.M.N., 1998.

Gordillo, Agustín, *Tratado de Derecho Administrativo y Obras Selectas*, Buenos Aires, Editorial Fundación de derechos Administrativos, 2013.

Guerrero Vivanco, Walter, *La Prueba Penal*, Quito, Editorial Pudeleco, 2004.

Jiménez de Asúa, Luis, *La Ley y el Delito*, Buenos Aires, Editorial Prólogo, 1958.

Jauchen, Eduardo M., *Tratado de la Prueba en Materia Penal*, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, 2009.

Junoy, Joan Picó I, *El Principio de la Buena Fe Procesal*, Madrid, Bosch Editor, 2008.

Levene (h), Ricardo, *Manual de Derecho Procesal Penal*, Buenos Aires, Editorial Depalma, 2008.

López de Quiroga, Jacobo, *Instituciones de Derecho Penal*. Buenos Aires, Ediciones Jurídicas, 2001.

Lovato, Juan Isaac, *Programa Analítico de Derecho Procesal Civil*, Quito, Editorial Jurídica, 2013.

Maier, Julio B. J., *Derecho Procesal Penal*, Buenos Aires, Editores del Puerto, 2004.

Mir Puig, Santiago, *El Derecho Penal en el Estado Social y Democrático de Derecho*, Barcelona, Editorial Ariel S. A., 1994.

Morales Viteri, Juan Pablo, et al. (o y otros), *Entre el Control Social y los Derechos Humanos, Los Retos de la Política y la Legislación de Drogas*, Quito, Editorial V&M Gráficas, 2009.

Olmedo, Clariá, *Derecho Procesal Penal*, Córdoba, Editorial Marcos, 1984.

Paladines, Jorge Vicente, *La (des)proporcionalidad de la ley y la justicia antidrogas en Ecuador, Cuadernos Defensoriales 1, Colectivo de Estudios Drogas y Derecho*, Quito, Defensoría Pública del Ecuador, 2012.

Quintero Olivares, Gonzalo, *Política Criminal y Determinación de la Pena*, Buenos Aires, Editorial Política Penal, 2010.

Ramírez, María Lourdes, *Postura de la Corte Constitucional Colombiana en Relación con el Poder Sancionador de la Administración*, Barranquilla, Ediciones Universitarias de Derecho, 2011.

Suplemento del Registro Oficial Nro. 1 de 1 de agosto de 1998. Constitución Política del Ecuador. Quito - Ecuador

Torres Chávez, Efraín, *Comentarios Código de Procedimiento Penal*, Quito, Editorial Estudios y Publicaciones, 2001.

Vaca Andrade, Ricardo, *Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo II*, Quito, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 2009.

Vázquez Rossi, Jorge Eduardo, *Derecho Procesal Penal*, Buenos Aires, Editorial Rubinza – Culzoni, 2008.

Velasco Velasco, Fernando, *Derecho Penal General*, Bogotá, Editorial Tecnos, 2007.

Young, Jock, et al. (o y otros), *Criminología Crítica*, Rosario, Editorial Juris, 1993.

Zavala Baquerizo, Jorge, *El Debido Proceso Penal*, Quito, Editorial Edino, 2002.

Zavala Baquerizo, Jorge, *Tratado de Derecho Procesal Penal*, Guayaquil, Editorial Edino, 2004.

Zaffaroni, Eugenio Raúl, *Derecho Penal, Parte General*, Buenos Aires, Sociedad Anónima Editora, Comercial, Industrial y Financiera, 2002.

### **Legislación:**

Constitución de la República del Ecuador.

Código Orgánico Integral Penal.

### **Citas de Internet:**

Edwards, Sandra G. Transnational Institute Drugs and Democracy, Mayo 2010, tomado de: [http://druglawreform.info/images/stories/documents/Systems\\_Overload/TNI-Systems\\_Overload-ecuador-def.pdf](http://druglawreform.info/images/stories/documents/Systems_Overload/TNI-Systems_Overload-ecuador-def.pdf)

Velasco, Carla Álvarez. Reformas y contradicciones en la política de drogas en Ecuador. Julio 2014, tomado de:

[http://www.wola.org/sites/default/files/Drug%20Policy/Informe\\_debate%20de%20drogas\\_FINAL\\_%20PARA%20PUBLICAR.pdf](http://www.wola.org/sites/default/files/Drug%20Policy/Informe_debate%20de%20drogas_FINAL_%20PARA%20PUBLICAR.pdf)

<http://www.ministeriointerior.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2012/10/Doctrina-Policia-de-la-Rep%C3%BAblica-del-Ecuador.pdf>

<http://www.amag.edu.pe/webestafeta2/index.asp?warproom=articles&action=read&idart=113>

<http://www.andes.info.ec/es/noticias/secretaria-tecnica-drogas-inicia-acciones-integrales-combatir-microtrafico-ecuador.html>



<http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-fortalece-lucha-contra-microtrafico-nueva-tabla-sancionar-posesion-drogas.html>